



SESIÓN ORDINARIA
H. LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

PRESIDENTE: SESIÓN ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 10 DE ENERO DE 2017.

EN LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS (11:00) ONCE DEL DÍA (10) DIEZ DEL MES DE ENERO DEL AÑO (2017) DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO ASISTIDO DE LAS DIPUTADAS SECRETARIAS MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ Y SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, DIO PRINCIPIO LA SESIÓN CON LA INSTRUCCIÓN A LA OFICIALÍA MAYOR QUE ABRA EL SISTEMA DE REGISTRO HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA QUE LOS DIPUTADOS INSCRIBAN SU ASISTENCIA, REGISTRÁNDOSE DE “PRESENTE” LOS SIGUIENTES: DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO; DIPUTADA GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ; DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO; DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ; DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO; DIPUTADA ROSA ISEL DE LA ROCHA NEVÁREZ; DIPUTADO JESÚS EVER MEJORADO REYES; DIPUTADO MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ; DIPUTADA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ; DIPUTADA ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ; DIPUTADO JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA; DIPUTADO SERGIO URIBE RODRÍGUEZ; DIPUTADA JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ; DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS; DIPUTADO ADÁN SORIA RAMÍREZ;

DIPUTADO AUGUSTO FERNANDO ÁVALOS LONGORIA; DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN; DIPUTADA ELIA ESTRADA MACÍAS; DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ; DIPUTADA ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ; RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ; DIPUTADO RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO; ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y DIPUTADA ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA, Y SE INSTRUYE A LA DIPUTADA SECRETARIA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ, PARA QUE VERIFIQUE EL RESULTADO E INFORME SI EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR LA SESIÓN.

Nombre	Registro
AUGUSTO F. ÁVALOS LONGORIA	12:25:23
ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR	12:28:20
JORGE A. SALUM DEL PALACIO	12:25:19
SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO	12:25:22
MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ	12:27:05
LUIS ENRÍQUE BENÍTEZ OJEDA	12:29:00
ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ	12:30:50
GERARDO VILLARREAL SOLÍS	12:28:42
ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ	12:28:45
FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ	12:32:10
JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ	12:28:09
RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ	12:29:00
MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ	12:28:00
RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN	12:18:00
JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ	12:25:44
ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ	12:28:49
JESÚS EVER MEJORADO REYES	12:30:38
ADÁN SORÍA RAMÍREZ	12:18:00
ELIA ESTRADA MACIAS	12:37:32
GINA G. CAMPUZANO GONZÁLEZ	12:25:41
JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA	12:31:48
SERGIO URIBE RODRÍGUEZ	12:29:14
RIGOBERTO QUIÑÓNEZ SAMANIEGO	12:35:58
ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ	12:25:51
MAR GRECIA OLIVA GUERRERO	12:28:39

3

DIPUTADA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SON VEINTE DIPUTADOS PRESENTES, CORRECCIÓN DIPUTADO PRESIDENTE, SON VEINTIÚN DIPUTADOS PRESENTES, HAY QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADA, HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN.

PRESIDENTE: INFORMO A LA ASAMBLEA QUE LOS ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN, SE DAN A CONOCER MEDIANTE LA GACETA PARLAMENTARIA QUE PUEDE SER CONSULTADA DESDE SUS LUGARES, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA Y DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES A LEYES DE INGRESOS SE ENCUENTRAN EN EL APARTADO DE DICTÁMENES QUE APARECE EN EL MONITOR DE SUS CURULES.

PRESIDENTE: ESTA PRESIDENCIA SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016.

PRESIDENTE: SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LAS Y LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado	Sentido
AUGUSTO F. ÁVALOS LONGORIA	A favor
ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR	A favor
JORGE A. SALUM DEL PALACIO	A favor
SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO	A favor
MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ	A favor
LUIS ENRÍQUE BENÍTEZ OJEDA	
ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ	A favor
GERARDO VILLARREAL SOLÍS	A favor
ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ	A favor
FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ	A favor
JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ	A favor
RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ	
MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ	A favor
RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN	
JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ	
ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ	
JESÚS EVER MEJORADO REYES	A favor
ADÁN SORÍA RAMÍREZ	
ELIA ESTRADA MACIAS	
GINA G. CAMPUZANO GONZÁLEZ	A favor
JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA	A favor
SERGIO URIBE RODRÍGUEZ	A favor
RIGOBERTO QUIÑÓNEZ SAMANIEGO	A favor
ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ	A favor
MAR GRECIA OLIVA GUERRERO	

DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO: SON DIECISIETE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, ES CUANTO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADA, SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PRESIDENTE: PREGUNTO A LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS SI DESEAN HACER ALGUNA ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN AL ACTA CUYA LECTURA SE HA DISPENSADO.

PRESIDENTE: AL NO HABER INTERVENCIONES SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EN FORMA ECONÓMICA EL ACTA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA, PARA LO CUAL LOS DIPUTADOS TIENEN HASTA UN MINUTO PARA REGISTRAR SU VOTO.

PRESIDENTE: SE CIERRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN, Y SE INSTRUYE A LA DIPUTADA SECRETARIA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ, PARA QUE DE A CONOCER EL SENTIDO DE LOS VOTOS A ESTA PRESIDENCIA.

Diputado	Sentido
AUGUSTO F. ÁVALOS LONGORIA	A favor
ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR	A favor
JORGE A. SALUM DEL PALACIO	A favor
SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO	A favor
MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ	A favor
LUIS ENRÍQUE BENÍTEZ OJEDA	
ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ	A favor
GERARDO VILLARREAL SOLÍS	A favor
ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ	A favor
FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ	
JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ	A favor
RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ	
MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ	A favor
RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN	
JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ	A favor
ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ	
JESÚS EVER MEJORADO REYES	A favor
ADÁN SORÍA RAMÍREZ	A favor
ELIA ESTRADA MACIAS	
GINA G. CAMPUZANO GONZÁLEZ	A favor
JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA	A favor

SERGIO URIBE RODRÍGUEZ	A favor
RIGOBERTO QUIÑÓNEZ SAMANIEGO	A favor
ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ	A favor
MAR GRECIA OLIVA GUERRERO	

DIPUTADA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ: SEÑOR PRESIDENTE SON DIECIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE.

PRESIDENTE: SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE: SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, DAR LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA.

DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO, 10 DE ENERO DE 2017.

OFICIO No. DGPL-1P2A.-5020.9.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITEN EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE Y REGISTROS CIVILES.



7

PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES.

OFICIO No. DGPL-1P2A.-5157.9.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, ANEXANDO PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL CONTEXTO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EXHORTA CON PLENO RESPETO AL FEDERALISMO, A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A CONFORMAR GRUPOS DE TRABAJO CON ENFOQUE EN EL COMBATE A LA POBREZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”.

PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.

OFICIO No. DGPL-1P2A.-5218.9.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, COMUNICANDO CLAUSURA DE SU PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.

PRESIDENTE: ENTERADOS.



8

OFICIO No. DGPL.63-II-5-1801.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LOS CONGRESOS LOCALES, A AMPLIAR LOS INCENTIVOS FISCALES EN LOS RUBROS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASÍ COMO DE FORTALECER Y EXTENDER LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

OFICIO No. DGPL.63-II-5-1801.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL CUAL SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES EN CUYOS CÓDIGOS PENALES SE CONTEMPLA LA FIGURA DEL MATRIMONIO COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE ESTUPRO, PARA QUE EN SU CASO SE REVISE Y MODIFIQUE SU LEGISLACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.

PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

OFICIO S/N.- ENVIADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE INDÉ, DGO., EN EL CUAL ANEXAN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019.



PRESIDENTE: ENTERADOS.

OFICIO S/N.- PRESENTADO POR UN GRUPO DE MAESTROS
AFECTADOS.- HACIENDO DIVERSAS MANIFESTACIONES.

PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.

DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO: ES CUANTO
PRESIDENTE.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADA, Y ENTRAMOS AHORA A LA
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA Y EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO
DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE
BENÍTEZ OJEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMA
AL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DE LOS
ARTÍCULOS 60 Y 61 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA
PARLAMENTARIA.

**CC SECRETARIOS DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.**

El suscrito Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, y con las facultades que me confieren los artículos 78 fracción I de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar ante este Honorable Pleno, iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 60 y 61 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, misma que se realiza al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como máximos representantes de la sociedad de Durango, por convicción más que por obligación o responsabilidad, es nuestro deber estar atentos a las preocupaciones, intereses y necesidades a las que

10

se enfrentan diariamente nuestros representados.

Crisis económica, pocas fuentes de empleo, provocan un sentir de intranquilidad social, lo que en Durango ha generado una escalada de respuestas inexactas por parte de algunas autoridades de Gobierno, las cuales no compartimos y más aún buscamos alternativas responsables para asegurar finanzas públicas sanas.

Si bien es cierto, la Constitución Federal señala que es obligación de los ciudadanos contribuir a los gastos del Estado, la propia Carta Magna señala que esta contribución debe ser equitativa y proporcional, siendo la proporcionalidad un elemento esencial de las leyes tributarias al igual que la capacidad contributiva de las personas, así lo ha señalado el Alto Tribunal de la Nación en las tesis de jurisprudencia que a continuación se citan

Tesis: P./J. 109/99

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

Tesis: P./J. 10/2003

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional,

debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.

En mis distintos ejercicios como Diputado ya sea federal o local, siempre le he apostado a que la sociedad no sea perjudicada por decisiones apresuradas e irresponsables, y más aún cuando se viven situaciones económicas desfavorables, hemos apostado por proponer opciones antes de afectar la economía familiar, esa es nuestra apuesta, proponer soluciones para resolver, en primer lugar los problemas apremiantes de nuestros representados, los cotidianos, los del día a día, sin olvidar los de mediano y largo plazo que den estabilidad a todas las familias de Durango.

El tema comúnmente conocido como “replaqueo” no cumple con el postulado constitucional de proporcionalidad, además de ser un impuesto que ante las circunstancias que nos rodean causa un serio perjuicio a la economía de las familias duranguenses.

Por ello propongo que se reforme la Ley de Hacienda del Estado para que la renovación de las placas se realice cada 8 años y de forma proporcional a la capacidad contributiva de las personas, de aprobarse esta reforma, estaríamos garantizando que los duranguenses contribuyan a los gastos públicos de acuerdo a sus posibilidades.

De igual forma una consecuencia lógica de esta propuesta es que los duranguenses que ya hayan realizado el pago por el replaqueo considerado en la Ley de Ingresos del Estado 2017, deberán recibir el reembolso de su pago, por lo cual la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado deberá establecer los procedimientos administrativos para tal fin.

En tal virtud, en aras de apoyar la economía de las familias duranguenses, presento la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del apartado A del artículo 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para quedar como sigue:

Artículo 60. -----

Apartado A-----

I.-----

1 a 6. -----

El pago por servicio de control en la dotación de placas, por canje o replaqueo, deberá realizarse cada ocho años en la forma y términos indicados en el artículo 61 de la presente ley.

II a VII.-----

B.-----

Artículo 61.- Los derechos por refrendo anual; ratificación anual de concesiones, permisos o autorizaciones; explotación de permisos de ruta anual, expedición de tarjetas de circulación y engomados, deberán pagarse dentro de los tres primeros meses de cada año de calendario, en las oficinas autorizadas que corresponda, en las formas oficiales que apruebe la Secretaría de Finanzas y Administración. Si se



12

elige la opción de pago vía Internet en línea, el derecho se tendrá por pagado una vez que sea registrado por el sistema y valorado por la autoridad respectiva.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

Artículo Segundo. – Los contribuyentes que hayan realizado el pago de replaqueo contemplado en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal para el año 2017 del Estado de Durango deberán recibir el reembolso correspondiente,

Artículo Tercero.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, en un plazo que no exceda de 30 días deberá establecer los procedimientos administrativos para realizar los reembolsos que correspondan.

Artículo Cuarto. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Victoria de Durango, Durango a 7 de enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO AL AUTOR SI DESEA AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: AL SER QUE NO SE ENCUENTRA EN LA SALA EL DIPUTADO BENÍTEZ POR LO TANTO LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, JESÚS EVER MEJORADO REYES, SERGIO URIBE RODRÍGUEZ, JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ, ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ, MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ, LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ, ADÁN SORIA RAMÍREZ, JOSÉ



13

GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
GERARDO VILLARREAL SOLÍS REPRESENTANTE DE PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES AL
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO
DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA
PARLAMENTARIA.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E

Los suscritos Diputados RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, JESÚS EVER MEJORADO REYES, SERGIO URIBE RODRÍGUEZ, JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ, ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ, MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ, LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ, ADÁN SORIA RAMÍREZ, JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y GERARDO VILLARREAL SOLÍS representante de Partido Verde Ecologista de México; todos integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 171 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, sometemos a consideración del Honorable Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE DURANGO, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada vez más estudios asocian el nivel de productividad de un país, no solo con su nivel de prosperidad, sino también con su capacidad para afrontar escenarios adversos y cambiantes como el actual.

La situación financiera que prevalece en nuestro país derivado del aumento de los combustibles y que tiene un impacto en la vida social exige que el Poder Legislativo del Estado asuma su responsabilidad de ser un facilitador en la consolidación de un mercado interno así como la creación de empleos en Durango.

Si bien es cierto una situación adversa puede verse como perjudicial, también es cierto que en las crisis puede ser generadora de nuevas oportunidades de desarrollo, si bien es cierto, el papel del Congreso Estatal no es ser generador de empleos sí está en nuestras manos diseñar una regulación clara y eficiente que propicie las condiciones necesarias para la creación de un sector privado dinámico y competitivo.

En este sentido, tanto la mejora regulatoria como la disminución de impuestos y derechos han sido claves en las agendas de competitividad y productividad de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en los últimos años.

La mejora regulatoria y los incentivos fiscales van de la mano, es así que estos últimos resultan determinantes para la creación de fuentes de trabajo, si existen impuestos altos o difíciles de pagar, esto puede afectar negativamente la operatividad de las empresas, su potencial de crecimiento, etc.

Las circunstancias actuales son momento propicio para tomar medidas positivas que incentiven a los empresarios a arriesgar sus recursos en la creación de empleos, insistimos en ser facilitadores en el desarrollo económico de Durango, en impulsar la creación de un mercado interno fuerte; de ahí que esta iniciativa tenga por objeto ampliar el periodo por cual las empresas pueden exentar el pago del Impuesto

Sobre Nómina, lo anterior a fin de que las empresas puedan consolidar sus operaciones antes de cargar con el peso de las obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO:

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS CONTENIDOS DE LOS ARTICULOS 82 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 59 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 59. La exención temporal de los siguientes impuestos y derechos estatales, se aplicarán de conformidad con lo siguiente:

I. Impuesto Sobre Nómina:

- a. Micro y pequeña empresa, hasta 3 años de exención.
- b. Mediana empresa, hasta 5 años de exención.
- c. Empresa grande, hasta 6 años de exención.
- d. Sociedad cooperativa, hasta 4 años de exención.

II a IV.-----

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. – Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Victoria de Durango, a los 9 días del mes de enero del año 2017

RÚBRICA

RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

RÚBRICA

JESÚS EVER MEJORADO REYES

RÚBRICA

SERGIO URIBE RODRÍGUEZ

RÚBRICA

JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ

RÚBRICA

ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ

RÚBRICA

MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ

RÚBRICA

ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ

RÚBRICA

LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA

RÚBRICA

MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ

RÚBRICA

FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ

RÚBRICA

ADÁN SORIA RAMÍREZ

RÚBRICA

JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA

RÚBRICA

GERARDO VILLARREAL SOLÍS



15

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO AL AUTOR SI DESEA AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: ADELANTE DIPUTADO SERGIO URIBE TIENE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS.

DIPUTADO SERGIO URIBE RODRÍGUEZ: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, HAGO USO DE LA PALABRA PARA PRESENTAR LA INICIATIVA DE LAS REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO DEL ESTADO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA CUAL ES PARTE DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS EL DÍA DE AYER PARA ENFRENTAR LA COMPLEJA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL PAÍS Y SE REFLEJA EN NUESTRA ENTIDAD, CADA DÍA, CADA VEZ MÁS ESTUDIOS ASOCIAN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE UN PAÍS, NO SOLO A SU NIVEL DE PROSPERIDAD, SINO TAMBIÉN CON SU CAPACIDAD PARA AFRONTAR ESCENARIOS ADVERSOS Y CAMBIANTES COMO EL ACTUAL, LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE PREVALECE EN NUESTRO PAÍS DERIVADO DEL AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES Y QUE TIENE UN IMPACTO EN LA VIDA SOCIAL EXIGE QUE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE SER UN FACILITADOR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO INTERNO, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN DURANGO, SI BIEN ES CIERTO UNA SITUACIÓN ADVERSA PUEDE VERSE COMO PERJUDICIAL, TAMBIÉN ES CIERTO QUE LAS CRISIS PUEDEN SER GENERADORAS DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y TAMBIÉN CIERTO, ES QUE EL PAPEL DEL CONGRESO DEL ESTADO NO ES DE SER GENERADOR DE EMPLEOS,



PERO ESO SI ESTA EN NUESTRAS MANOS, EN ESTE CONGRESO, EN ESTA SOBERANÍA CREAR Y DISEÑAR UNA REGULACIÓN CLARA Y EFICIENTE QUE PROPICIE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE UN SECTOR PRIVADO, DINÁMICO Y COMPETITIVO, EN ESTE SENTIDO TANTO A LA MEJORA REGULATORIA COMO LA DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS HAN SIDO CLAVES EN LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES MEXICANOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MEJORA REGULATORIA Y LOS INCENTIVOS FISCALES VAN DE LA MANO, ES ASÍ QUE EN LOS ÚLTIMOS RESULTAN DETERMINANTES PARA LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO, SI EXISTEN IMPUESTOS ALTOS Y DIFÍCILES DE PAGAR ESTO PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE LA OPERATIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO, LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES SON MOMENTO PROPICIO PARA TOMAR MEDIDAS PREPOSITIVAS QUE INCENTIVEN A LOS EMPRESARIOS A ARRIESGAR SUS RECURSOS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS, INSISTIMOS EN SER FACILITADORES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE DURANGO, EN IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN MERCADO INTERNO FUERTE DE AHÍ QUE ESTA INICIATIVA TENGA POR OBJETO AMPLIAR EL PERIODO POR EL CUAL LAS EMPRESAS PUEDAN EXENTAR EL PAGO SOBRE NOMINAS, LO ANTERIOR A FIN DE QUE LAS EMPRESAS PUEDAN CONSOLIDAR SUS OPERACIONES ANTE LA CARGA CON EL PESO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, LAS CIRCUNSTANCIAS OBLIGAN A QUE COMO PODER LEGISLATIVO GENEREMOS FACILIDADES PARA HACER NEGOCIOS MIENTRAS MAYORES FACILIDADES OTORGUEMOS A LOS EMPRESARIOS, MIENTRAS MAYORES SEAN LOS ESTÍMULOS QUE



17

ENCUENTRE LA INICIATIVA PRIVADA SEGURO, SEGURO QUE A DURANGO LE IRA MEJOR PERO SOBRETODOS A LAS MILES DE FAMILIAS QUE TENDRÁN OPORTUNIDAD DE TRABAJAR UN EMPLEO QUE LES GENERE NO SOLO LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR EL SUSTENTO ECONÓMICO QUE LLEVEN A SUS FAMILIAS ADEMÁS CON UN EMPLEO QUE SE GENERE TENDRÁN ESAS FAMILIAS DURANGUENSES LA POSIBILIDAD DE INCORPORARSE AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL PARA LA ASISTENCIA MEDICA, PERO ADEMÁS CON UN EMPLEO QUE SE GENERE A FAVOR DE LOS DURANGUENSES TAMBIÉN TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE QUE SE GENERE A ESA FAMILIA LA OPORTUNIDAD DE TENER ACCESO A LA VIVIENDA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE INFONAVIT, POR ESO COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS PLANTEAMOS EL SIGUIENTE ESQUEMA DE EXTENSIÓN DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA HASTA TRES AÑOS DE EXTENSIÓN PARA QUIENES GENEREN NUEVOS EMPLEOS, PARA LA MEDIANA EMPRESA CINCO AÑOS, EMPRESAS GRANDES CON SEIS AÑOS DE EXTENSIÓN Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS HASTA CUATRO AÑOS LAS ANTERIORES MEDIDAS TIENEN POR OBJETO IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS QUE LOS EMPRESARIOS VEAN QUE EN DURANGO SE FACILITAN LOS EMPLEOS QUE SE LES FACILITA CREAR EMPLEOS A ELLOS QUE SE LES ESTIMULA, QUE SE LES INCENTIVA, PERO SOBRE TODO QUE MANDEMOS ESE MENSAJE QUE LOS EMPRESARIOS TAMBIÉN TIENEN QUE SER SOLIDARIOS EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES Y QUE NOSOTROS COMO CONGRESO LES DEMOS ESA POSIBILIDAD DE QUE ELLOS GENEREN EMPLEOS PERO TAMBIÉN RECIBAN EL RESPALDO DE QUIENES GENERAMOS Y CREAMOS LAS LEYES COMO DIJE ANTERIORMENTE ESTA ES UNA



18

MEDIDA QUE FORMA PARTE DE UN PAQUETE DE PROPUESTAS QUE PRESENTAMOS COMO UNA ALTERNATIVA A LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL ESTADO EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LA REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO VERDE ASUMIMOS EL COMPROMISO DE REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA PARA GENERAR MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS LOS DURANGUENSES POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADO, LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO URIBE SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PRESIDIDA POR EL MISMO DIPUTADO SERGIO URIBE RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Durango nos corresponde emitir y reformar nuestras normas secundarias con el fin de establecer un marco jurídico que privilegie una mayor eficiencia, eficiencia y transparencia del gasto público.

Actualmente en la Administración Pública resulta de suma relevancia que los gobiernos acudan al mercado local con el fin de realizar las adquisiciones y enajenaciones de bienes y servicios necesarios para la administración gubernamental, por ello es de gran importancia para la economía del estado de Durango, ya que el gasto público puede ser implementado como un mecanismo de inversión con efectos multiplicadores del empleo, incentivos a la productividad, consolidación de empresas locales y demás actividades que propicien mejores condiciones para el crecimiento de la actividad económica de la entidad.

No debemos dejar de lado que la capacidad del Estado de incidir en la economía local a través del gasto público y buscando que la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno sea un factor que determine la consolidación del mercado interno y el desarrollo de las empresas duranguenses, es por eso, que se deben implementar nuevos mecanismos en nuestras normas estatales que otorguen mayor prioridad a la oferta local para la contratación de los ya referidos bienes y servicios.

Lamentablemente en algunas ocasiones los gobiernos en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad y en su caso plazo, en lugar de consumir e impulsar el mercado interno en la entidad acuden a mercados de otras entidades federativas e incluso en algunos casos a mercados internacionales con el fin de adquirir bienes y servicios necesarios para la administración pública, por lo cual el gobierno se desvincula del desarrollo y crecimiento de la actividad económica del Estado.

Por ello, la presente iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento y Servicios del Estado del Estado de Durango pretende establecer que en la contratación de bienes y servicios necesarios para el Estado, en igualdad de condiciones donde se privilegie a las empresas duranguenses sobre las establecidas en otras entidades federativas o en el extranjero, de esta manera se considera necesario que en los distintos procedimientos de contratación de bienes y servicios previsto en la Ley ya sean licitaciones públicas, concurso, invitación, y adjudicación directa el Gobierno del Estado opte en primer término por las empresas locales, en segundo por las nacionales y en tercero por las internacionales.

De la misma manera se propone que las adquisiciones que la administración pública efectúe de empresas locales deberán representar cuando menos el cincuenta por ciento del gasto público destinado a la adquisición de bienes muebles, arrendamientos y contratación de servicios.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 25 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 25. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, en sus procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y contratación de servicios que requieran; deberán de observar que al menos el 80% de estos se adquieran a proveedores Locales y que representen cuando menos el 51% del presupuesto programado para la adquisición de bienes muebles, arrendamientos y servicios que se requieran conforme a esta Ley.

Si existen dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia máxima del dos por ciento, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:

- I. A los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicilio en el Estado;
- II. Al proveedor local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero;
- III. A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente; y
- IV. Los proveedores que presenten innovaciones tecnológicas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2016.

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN



21

PRESIDENTE: POR LO CUAL PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: ADELANTE ME HAN SOLICITADO LA PALABRA PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS MOTIVOS LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, POR LO CUAL TIENE QUINCE MINUTOS.

DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO: BUENAS TARDES COMPAÑEROS, CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE Y COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS, COMO DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE DURANGO NOS CORRESPONDE EMITIR Y REFORMAR NUESTRAS NORMAS SECUNDARIAS CON EL FIN DE ESTABLECER UN MARCO JURÍDICO, QUE PRIVILEGIE UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PUBLICO, ACTUALMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA RESULTA DE SUMA RELEVANCIA QUE LOS GOBIERNOS ACUDAN AL MERCADO LOCAL CON EL FIN DE REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, POR ELLO, RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE DURANGO YA QUE EL GASTO PUBLICO PUEDE SER IMPLEMENTADO COMO UN MECANISMO DE INVERSIÓN CON EFECTOS MULTIPLICADORES DEL EMPLEO INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD, CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS LOCALES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE PROPICIEN MEJORES CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, NO DEBEMOS DEJAR DE LADO QUE LA CAPACIDAD DEL



ESTADO DE INCIDIR EN LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DEL GASTO PÚBLICO Y BUSCANDO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL GOBIERNO SEA UN FACTOR QUE DETERMINE LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO INTERNO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DURANGUENSES, ES POR ESTO QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS EN NUESTRAS NORMAS ESTATALES QUE OTORGUEN MAYOR PRIORIDAD A LA OFERTA LOCAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS YA REFERIDOS BIENES Y SERVICIOS, LAMENTABLEMENTE EN ALGUNAS OCASIONES LOS GOBIERNOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y EN SU CASO PLAZO EN LUGAR DE CONSUMIR E IMPULSAR EL MERCADO INTERNO EN LA ENTIDAD ACUDEN A MERCADOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS E INCLUSO EN ALGUNOS CASOS A MERCADOS INTERNACIONALES, CON EL FIN DE ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LO CUAL EL GOBIERNO SE DESVINCULA DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO, LA PRESENTE INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO PRETENDE ESTABLECER QUE EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL ESTADO EN IGUAL DE CONDICIONES DONDE SE PRIVILEGIA A LAS EMPRESAS DURANGUENSES SOBRE LAS ESTABLECIDAS EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS O EN EL EXTRANJERO, DE ESTA MANERA SE CONSIDERA NECESARIO QUE EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA LEY, YA SEAN LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS, INVITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DIRECTA AL GOBIERNO DEL ESTADO OPTE EN PRIMER



23

TERMINO POR LAS EMPRESAS LOCALES, EN SEGUNDO POR LAS NACIONALES Y EN TERCERO POR LAS EMPRESAS INTERNACIONALES, DE LA MISMA MANERA SE PROPONE QUE LAS ADQUISICIONES QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFECTUÉ DE EMPRESAS LOCALES DEBERÁN DE REPRESENTAR CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CONSIDERADO AL NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NOS PERMITIMOS SOMETER PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE LA SIGUIENTE INCITATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ESPERANDO SU APOYO EN SU PROCESO DICTAMINACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN POR ESTE HONORABLE PLENO DEL CONGRESO, POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS, ES CUANTO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, LA INICIATIVA PRESENTADA POR ELLA SE TURNA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PRESIDIDA POR ELLA MISMA.

PRESIDENTE: LE INFORMO A LA ASAMBLEA QUE ME HA SOLICITADO EL USO DE LA PALABRA PARA HACER LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE SU INICIATIVA, DADO A QUE NO ESTABA EN LA SALA AL MOMENTO DE QUE LA PRESENTE EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA Y HACIENDO UNA EXCEPCIÓN CON MUCHO GUSTO LE CONCEDEMOS EL USO DE LA PALABRA A EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ HASTA



24

POR QUINCE MINUTOS, PARA AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU INICIATIVA PRESENTADA.

AMPLIACIÓN PUNTO 4 (LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO).

DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA: GRACIAS PRESIDENTE EN CUMPLIMIENTO A UN COMPROMISO QUE HICE PUBLICO HACE UNOS DÍAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA, ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DÍA DE HOY PRESENTO Y QUIERO AMPLIAR LOS MOTIVOS DE LA INICIATIVA QUE SE TURNARA SEGURAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA RESPECTO DE UNA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 60 Y 61 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, PARA ELIMINAR PARA SIEMPRE EL DERECHO DE REPLAQUEO QUE COBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO ES UNA CIRCUNSTANCIA QUE TIENE QUE VER CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EN SU ARTICULO 31, HABLA DE LA OBLIGACIÓN QUE TENEMOS TODOS LOS MEXICANOS DE CONTRIBUIR CON EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A LA POSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO MEXICANO CUMPLA CON SU COMPROMISO HACIA LA SOCIEDAD, PERO QUE TAMBIÉN EL ARTICULO 31 DICE QUE DEBERÁ DE SER DE ACUERDO A LA CAPACIDAD, A LA EQUIDAD, A LA PROPORCIONALIDAD DE CADA INGRESO DE LOS MEXICANOS Y QUE EN MOMENTOS DIFÍCILES COMO LOS QUE ESTAMOS VIVIENDO HOY EN DÍA, CON EL AUGURIO DE UN AÑO COMPLEJO EL 2017, ES MOMENTO DE QUE LOS LEGISLADORES Y DE QUE ESTA SOBERANÍA PENSEMOS EN LA GENTE Y NOS PONGAMOS DEL LADO DE LOS CIUDADANOS Y BUSQUEMOS NO CARGARLE LA MANO MAS CON



25

PAGOS DE IMPUESTOS, DERECHOS Y OTROS CONCEPTOS DE TAL SUERTE DE QUE HOY VENGO A ESTE CONGRESO A PROPONER REFORMAS AL ARTICULO 60 Y AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE HACIENDO DEL ESTADO DE DURANGO PARA ELIMINAR EL COBRO DE REPLAQUEO Y PARA QUE EN DURANGO NUNCA MAS VOLVAMOS A PAGAR POR LAS PLACAS QUE TIENEN LOS VEHICULOS PARTICULARES PARA PODER CIRCULAR, ENTIENDO QUE HAY LA SENSIBILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RECONOCÍ Y RECONOZCO PÚBLICAMENTE HOY QUE EL GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES EN SU AFÁN DE SALIR A DARLE UNA BUENA NOTICIA AL PUEBLO DE DURANGO DETERMINO QUE NO HABRÍAN DE COBRARSE LAS PLACAS DURANTE TRES MESES A PERSONAS FÍSICAS, PERO HOY DEBO DE SEÑALAR EN ESTA TRIBUNA CON TODO RESPETO QUE ESA ES UNA ATRIBUCIÓN LEGAL QUE NO COMPETE AL EJECUTIVO Y QUE SOLO CORRESPONDE AL LEGISLATIVO, EL EJECUTIVO TIENE QUE HACER CUMPLIR Y VALER LA LEY Y HOY LA LEY DICE QUE SE DEBE DE COBRAR POR EL CAMBIO DE PLACAS, HOY LA LEY DICE QUE HAY QUE COBRAR UN MONTO QUE ESTA SEÑALADO EN LA LEY DE INGRESOS CON BASE EN LA LEY DE HACIENDA QUE SEÑALA QUE UNO DE LOS DERECHOS POR LOS QUE SE TIENE QUE COBRAR ES EL CAMBIO DE PLACAS Y HOY, HOY NO PUEDE EL EJECUTIVO DEJAR DE COBRAR POR QUE ESTARÍA FALTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y ESTARÍA VIOLANDO LA LEY DE TAL SUERTE DE QUE PARA ENTENDIENDO ESTA SITUACIÓN CORREGIR ESTA CIRCUNSTANCIA Y QUE ESTEMOS DENTRO DE LA LEY ES QUE VENGO A PROPONER QUE EN LA LEY DE HACIENDA MODIFIQUEMOS EL ARTICULO QUE LE DAN NACIMIENTO A ESTE DERECHO, QUE POR CIERTO Y NO ES PARTE DE ESTA INICIATIVA PERO LO COMENTO COMO



LUEGO SE DICE DE REFILÓN AGREGANDO AL TEMA, POR CIERTO NUESTRA LEY DE HACIENDA QUE LA PRESIDENTA LA DIPUTADA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO HA COMENTADO Y HEMOS COMPARTIDO LA NECESIDAD DE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA PARA QUE HAYA UNA ACTUALIZACIÓN O BIEN UNA NUEVA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE DURANGO, QUEDA A LA INTERPRETACIÓN LITERAL Y NO SISTEMÁTICA EN CUANTO AL COBRO DEL REPLAQUEO Y EN CUANTO AL COBRO DEL REFRENDO POR QUE MIREN USTEDES EN UN AÑO EN EL QUE SE CAMBIAN LAS PLACAS DE ACUERDO A COMO HOY ESTA LA LEY NO DEBIERA DE COBRARSE EL REFRENDO POR QUE VIENE REFIRIÉNDOSE A LO MISMO, SIN EMBARGO EL ARTICULO 60 NO ES CLARO Y SE TORNA A CONFUSIÓN Y SE HA INTERPRETADO LITERALMENTE, PERO AHÍ CABE HACER UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LO QUE LA DISPOSICIÓN EN SU CONJUNTO BUSCA TUTELAR O BUSCA SEÑALAR, QUE QUIERE DECIR CAMBIO DE PLACAS PUES QUE ENTREGO LAS QUE ESTÁN VIGENTES Y ME ENTREGAN UNAS NUEVAS Y EN LOS AÑOS SUBSECUENTES YO REFRENDO, ES DECIR, VOY ANTE LA AUTORIDAD Y DIGO LAS PLACAS QUE HOY TENGO AQUÍ ESTÁN LAS SIGO USANDO Y VENGO A PAGAR POR SEGUIRLAS USANDO A ESO SE REFIERE, REFRENDO VIENE DE ASEGURAR, REAFIRMAR, REITERAR, PERO EL CONCEPTO ES LA PLACA, EL CONCEPTO SE LLAMA PLACA ES EL MISMO DERECHO, ENTONCES EN EL AÑO EN QUE SE VA A CAMBIAR LA PLACA PUES NO DEBERÍA DE COBRARSE EL REFRENDO POR QUE NO SE PUEDE REFRENDAR LO QUE SE ESTA ADQUIRIENDO LO QUE SE ESTA PAGANDO QUE ES LA PLACA, EN ESE AÑO SOLO DEBERÍA COBRARSE LA PLACA Y LUEGO EN LOS SIGUIENTES AÑOS EL REFRENDO Y LUEGO CUANDO VUELVE A SER NECESARIO CAMBIAR LA



PLACA SE PAGA LA PLACA PERO NO EL REFRENDO Y ASÍ SUCESIVAMENTE POR QUE SE TRATA DEL MISMO CONCEPTO, SIN EMBARGO LA LEY DE HACIENDA EN EL ARTICULO 60 Y AQUÍ TENGO LA LEY SEÑALA CON TODA CLARIDAD LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO RELACIONADOS CON EL TRANSITO VEHICULAR DEBERÁN DE SER CUBIERTOS CON UNA CUOTA PRESENTADA EN BASE DÍAS DE SALARIO MININO O FRACCIÓN DEL MISMO SEGÚN EL SERVICIO QUE SE PRESTE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES, QUE POR CIERTO YA HAY QUE ACTUALIZAR TODO ESTO POR QUE AHORA YA SON LAS UMAS LAS UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN YA NO SON SALARIOS MÍNIMOS, PERO LUEGO YA VIENE TODA UNA, UN DESGLOSE CON LAS TABLAS POR CONTROL VEHICULAR Y AHÍ VIENEN LOS DERECHOS, VIENE INCLUSO LO DE LOS PERMISOS PROVISIONALES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS VIENE EL CAMBIO DE PROPIETARIO, EL CAMBIO DE DOMICILIO Y UNA SERIE DE DERECHOS TODOS DENTRO DE ESTE ARTICULADO Y DICE: LOS DERECHOS QUE SE GENEREN POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR EN LA EXPEDICIÓN DEL HOLOGRAMA POR REFRENDO PARA AQUELLOS VEHÍCULOS QUE CUENTEN CON JUEGO DE PLACAS DEBERÁN SER CUBIERTOS CADA AÑO EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 60 Y 61 PERO SE VUELVE A REFERIR AL JUEGO DE PLACAS EL REFRENDO TIENE QUE VER CON EL JUEGO DE PLACAS NO ES OTRA COSA ES LO MISMO Y ENTONCES AQUÍ VIENE EN EL ARTICULO 60 LOS DERECHOS Y NO ES MUY CLARA LA LEY CUANDO HABLA Y DICE EL SERVICIO POR CONTROL EN LA DOTACIÓN INICIAL DE PLACAS, REPOSICIÓN, CANJE O REPLAQUEO Y LUEGO MAS ADELANTE EN OTRA DISPOSICIÓN HABLA DE REPOSICIÓN, CANJE, REPLAQUEO O



REFRENDO, O SEA ES DECIR COMO QUE FUERAN DIFERENTES COSAS CUANDO TODO SE REFIERE A LO MISMO A LAS PLACAS Y LUEGO NOS VAMOS AL 61 QUE TAMBIÉN YO PRETENDO REFORMAR PARA ELIMINAR ESO Y DICE EL 61 LOS DERECHOS POR CANJE DE PLACAS Y CIRCULACIÓN, REFRENDO ANUAL, RATIFICACIÓN ANUAL DE CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES ETCÉTERA, ETCÉTERA, ETCÉTERA, DEBERÁN PAGARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES DE CADA AÑO DE CALENDARIO EN LAS OFICINAS AUTORIZADAS ETC, ETC, ETC. QUE PRETENDO PUES QUE EN EL 60 SE ELIMINE LO QUE TIENE QUE VER CON EL PLAQUEO CON EL REPLAQUEO QUE SOLAMENTE QUEDE LA DOTACIÓN INICIAL DE PLACAS, REPOSICIÓN O CANJE POR QUE SE HAYAN DAÑADO PERO NO EL REPLAQUEO OBLIGATORIO Y QUE EN EL 61 SE ELIMINE LA PALABRA CAMBIO DE PLACAS DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES CUANDO EL AÑO QUE CORRESPONDA Y DE ESTA MANERA PODRÍAMOS PASAR A LO QUE YA SUCEDE EN OTRAS PARTES DEL MUNDO EN OTROS PAÍSES LAS PLACAS DE LOS VEHÍCULOS SON SIEMPRE LAS MISMAS Y LO QUE SE HACE ES QUE SOLAMENTE INCLUSO YA CON LA TECNOLOGÍA SE LES DA LECTURA CON UN APARATO CON UN DISPOSITIVO EN ALGUNOS PAÍSES ES ALGUNA PISTOLA QUE SE UTILIZA Y QUE SE PASA POR EL HOLOGRAMA O EL CÓDIGO DE BARRAS DE LA PLACA Y CADA AÑO SE ESTA VERIFICANDO QUE LA PLACA CORRESPONDE A ESE VEHÍCULO EL PADRÓN SE SIGUE ACTUALIZANDO SE CUMPLEN LAS RAZONES DE SEGURIDAD QUE ES POR LO QUE PAGAMOS REALMENTE ES UN DERECHO POR EL QUE PAGAMOS QUE TIENE QUE VER CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL AHÍ DICE LA LEY DE CONTROL Y DE SEGURIDAD QUE EL ESTADO ESTA OBLIGADO A



GUARDAR Y ENTONCES LA PLACA PODRÍA SERVIR SEIS, OCHO, DIEZ, QUINCE, VEINTE AÑOS SEGÚN LA CUIDE CADA QUIEN Y CADA AÑO PODRÍA ESTARSE VERIFICANDO CON ALGÚN DISPOSITIVO TECNOLÓGICO Y SOLO PAGAR CADA AÑO EL REFRENDO O EL REITERAR QUE AHÍ ESTA LA PLACA Y QUE SIGO PAGANDO PARA QUE EL ESTADO ME OTORQUE EL SERVICIO DE CONTROL Y DE SEGURIDAD DE QUE LOS VEHÍCULOS ESTÁN BIEN DOCUMENTADOS, DONDE ESTÁN, QUIENES SON LOS PROPIETARIOS, DONDE CIRCULAN, ESE ES EL SERVICIO QUE EL ESTADO PRESTA PARA ESO ES Y ENTONCES ME PARECE QUE NO TENDRÍAMOS QUE ESTAR CADA TRES, CADA SEIS, CADA CUATRO, CADA OCHO AÑOS COMO CADA QUIEN LE QUIERA VER ESTAR PAGANDO POR NUEVAS PLACAS QUE AL FINAL DEL DÍA YO PLATEE EN SU MOMENTO AQUÍ ESTA LA PRESIDENTA Y AQUÍ ESTÁN LOS VIDEOS Y LAS ACTAS QUE NO ME DEJARAN MENTIR YO PLANTE EN SU MOMENTO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, QUE NO HABÍA CONDICIONES ECONÓMICAS PARA QUE LA GENTE PAGARA EL REPLAQUEO, SI A LA CUESTA DE ENERO COMO LE CONOCEMOS DESPUÉS DE LA NAVIDAD QUE LA GENTE QUE LOS CIUDADANOS TENEMOS QUE PAGAR EL PREDIAL, TENEMOS QUE PAGAR EL REFRENDO, TENEMOS QUE PAGAR EL REPLAQUEO, TENEMOS QUE PAGAR AHORA MAS POR LA GASOLINA Y CON ELLO TODAS LAS CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y MERCANCÍAS PUES A DONDE VAMOS A PARAR REALMENTE UNA FAMILIA, UN JEFE DE FAMILIA DE CLASE HUMILDE QUE TENGA UN VEHÍCULO Y QUE TENGA UNA PEQUEÑA CASITA, ENTRE EL REFRENDO EL REPLAQUEO EL LLENAR DEL TANQUE DE GASOLINA Y EL PAGAR EL PREDIAL NO MAS ASÍ DE GOLPE SON COMO CINCO MIL



PESOS QUE NO LOS GANAN EN EL SALARIO MININO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO Y YA SI NOS VAMOS A CLASE MEDIA BAJA ESTAMOS HABLANDO DEPENDIENDO DEL NUMERO DE VEHÍCULOS Y DEL TAMAÑO DE CASA DE GASTOS DE ENTRE DIEZ Y QUINCE MIL PESOS Y DE CLASE MEDIA ALTA HACIA ARRIBA O MEDIA ALTA PUES YA DE VEITE MIL EN ADELANTE ES DECIR NO HAY CONDICIONES PARA QUE LA GENTE PAGUE EN ESTE MOMENTO Y GASTE TANTO DINERO Y YO LO SEÑALE EN SU MOMENTO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, HAGAMOS POR ESTE AÑO LA EXCEPCIÓN Y NO COBREMOS EL REPLAQUEO ES MAS HABÍA Y EXISTE UN COMPROMISO DE HOY GOBERNADOR EN CAMPAÑA DE NO COBRAR REPLAQUEO Y DE NO COBRAR ES DECIR MANTENER NO COBRAR TENENCIA Y SE LE REFIRIÓ INCLUSO EN LAS REDES Y EN LOS MEDIOS CUANDO SALIÓ EL TEMA DEL PAGO DEL REPLAQUEO Y ENTONCES PUES HOY LO QUE BUSCAMOS ES QUE YA NO EXISTAN NO SOLO PARA ESTA VES SI NO PARA NUNCA QUE LO DEROGUEMOS QUE LO QUITAMOS DE LA LEY, TANTO DE LA LEY DE HACIENDA COMO EN SU MOMENTO QUE APRUEBEN LA LEY DE HACIENDA PUES SE MODIFIQUE LA LEY DE INGRESOS PARA QUE ESE CONCEPTO DE INGRESO YA TAMBIÉN SE MODIFIQUE Y NO ENTRE, FÍJENSE BIEN LA INICIATIVA QUE HOY PRESENTO NO TIENE QUE VER CON EL REFRENDO ESE ES UN ASUNTO QUE ESTA VENTILÁNDOSE A NIVEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI AL QUE YO PERTENEZCO Y QUE HOY NO SE HA PRESENTADO TODAVÍA, LO QUE YO VENGO A PRESENTAR ES EL REPLAQUEO QUE FUE UN COMPROMISO DE CAMPAÑA DEL HOY GOBERNADOR Y QUE YO EN LO PERSONAL SEÑALE NO SOLO EN LA COMISIÓN SINO AQUÍ MISMO EN EL PLENO EL DÍA QUE SE VOTO EL PASADO QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR Y DONDE YO NO



31

VOTE A FAVOR, USTEDES RECORDARAN Y AHÍ ESTÁN LAS VOTACIONES Y LAS ACTAS QUE FUI EL ÚNICO DIPUTADO QUE NO VOTO A FAVOR DEL REPLAQUEO, PUES HOY VENGO A SER CONGRUENTE CON ESO QUE DIJE EL QUINCE DE DICIEMBRE Y CON LO QUE HOY LA POBLACIÓN HA ESTADO MANIFESTANDO EN LAS CALLES DE RECHAZO DE INCONFORMIDAD Y DE MOLESTIA, NO ESTOY DE ACUERDO CON EL REPLAQUEO, NO ESTOY DE ACUERDO CON NUEVOS IMPUESTOS, NO ESTOY DE ACUERDO CON NUEVOS DERECHOS, NO ESTOY DE ACUERDO CON QUE SE LE COBRE MAS A LA GENTE, NO ESTOY DE ACUERDO CON EXCEPCIONES CON LA LEY, CUANDO EL GOBERNADOR AISPURO DICE TRES MESES SOLO PARA PERSONAS FÍSICAS ESTAMOS EXCLUYENDO A PERSONAS MORALES Y LA LEY DEBE DE SER EQUITATIVA Y PROPORCIONAL PARA TODOS Y HAY CORPORACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNDACIONES Y QUE NO TIENE LUCRO Y QUE TAMBIÉN MERECEN QUE NO SE LES COBRE POR LAS PLACAS, PERO ADEMÁS NO SOLO POR TRES MESES POR QUE POR TRES MESES POR TODO EL AÑO ERA UN COMPROMISO Y HAY QUE HACERLO EN LA LEY REALIDAD Y CON ESTO TERMINO LA FACULTAD NO LA TIENE EL EJECUTIVO LA FACULTAD LO TIENE EL LEGISLATIVO Y USTEDES COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DIPUTADOS TIENEN LA PALABRA HAGÁMOSLO POR LA GENTE Y POR DURANGO ES CUANTO.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADO LA INICIATIVA YA FUE TURNADA A LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE.



PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Pensiones del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario

mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas

administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5 fracción XX, 51 y 53 de la **Ley de Pensiones del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 5.- ...

I a la XIX...

XX.- **UMA.-Unidad de Medida y Actualización;**

XXI. a la XIV...

Artículo 51.- Cuando la pensión por jubilación sea equivalente a la **Unidad de Medida y Actualización**, se privilegiará el incremento que sea mayor entre el porcentaje que conceda el Gobierno del Estado o el que se establezca para el salario mínimo.

Artículo 53.- El monto de las pensiones no podrá ser inferior a la **Unidad de Medida y Actualización**. Para los servidores públicos que tengan ingresos por concepto de horas-clase, se tomará el promedio de los últimos tres años de sueldo sujeto a cotización, actualizado conforme al Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo., a 09 de enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

**PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.**



36

PRESIDENTE: ADELANTE HA SOLICITADO LA PALABRA EL DIPUTADO AUGUSTO ÁVALOS LONGORIA POR EL CUAL SE LE CONCEDE HASTA POR QUINCE MINUTOS.

DIPUTADO AUGUSTO ÁVALOS LONGORIA: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA COMPAÑEROS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS ANTES DE HACER ESTA AMPLIACIÓN QUIERO DESEARLES A TODOS UN AÑO 2017 DE SOLIDARIDAD, DE SALUD DE PAZ, IGUAL A TODAS LAS PERSONAS ASISTENTES A ESTE RECINTO Y ECHARLE MUCHAS GANAS, QUIERO TAMBIÉN COMENTAR GRACIAS, QUIERO COMENTAR TAMBIÉN QUE ESTA AMPLIACIÓN DE MOTIVOS INCLUYE LAS PRÓXIMAS 53 INICIATIVAS QUE PRESENTAMOS HOY EN LA ORDEN DEL DÍA Y QUISIERA HACER UNA AMPLIACIÓN, 53 QUISIERA HACER UNA AMPLIACIÓN AL ESCRITO QUE A CONTINUACIÓN LEERÉ QUE ES REFERENTE A LA (UMA) ESTA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN QUE CAMBIARÁ A PARTIR DE ESTAS REFORMAS QUE GENERAREMOS CON ESTA INICIATIVA Y QUE SERÁ REGULADA POR EL INEGI, POR AHÍ SE ME PREGUNTABA HACE UNOS MINUTOS COMO SE LE REGULARÁ SERÁ EL INEGI, NO EL GOBIERNO NO CÚPULAS EMPRESARIALES COMO ANTERIORMENTE SE HACÍA EN LA CUESTIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS Y SERÁ UNA ACTUALIZACIÓN RESPECTO AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE SERÁ ANUAL, AUNQUE PUDIERA SER DIARIO LA INFORMACIÓN, ESTE AJUSTE SERÍA ANUALMENTE, HASTA ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 27 DE ENERO DEL AÑO PASADO, EL SALARIO MÍNIMO NO ERA UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CON UN SOLO OBJETIVO, TODA VEZ QUE SU VALOR NO SE UTILIZABA

ÚNICAMENTE CON LA MÍNIMA REMUNERACIÓN QUE LEGALMENTE PUEDEN RECIBIR LOS TRABAJADORES, YA QUE TAMBIÉN ERA UNA UNIDAD DE CUENTA CON EL OBJETIVO DE INDEXAR CIERTOS, SUPUESTOS Y MONTOS COMO EL SALDO DE CRÉDITOS A LA VIVIENDA OTORGADOS POR ORGANISMOS DE FOMENTO, ASÍ COMO ALGUNAS CUOTAS Y TOPES DE LA APORTACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE OTROS. SE SABE QUE NUESTRO PAÍS MÁS DE LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA POBLACIÓN TIENEN COMO SU PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS EL SALARIO QUE PERCIBEN POR EL TRABAJO PERSONAL REALIZADO, LO QUE DA COMO RESULTADO QUE EL SALARIO ES EL COMPONENTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL Y DEL BIENESTAR SOCIAL, PUES ES EL ÚNICO MEDIO CON EL QUE CUENTAN MILLONES DE MEXICANOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS Y ASPIRAR A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE QUE EL SALARIO MÍNIMO DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES NORMALES DE UN JEFE DE FAMILIA EN EL ORDEN MATERIAL, SOCIAL Y CULTURAL Y PARA PROVEER A LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE LOS HIJOS, NO OBSTANTE ES MÁS QUE EVIDENTE QUE EL SALARIO GENERAL DIARIO EN LA REPÚBLICA MEXICANA DISTA MUCHO DE SATISFACER EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y LAS IMPERIOSAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES QUE LO PERCIBEN, LA POLÍTICA DE RESTRICCIÓN SALARIAL IMPUESTAS DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS ES LA CAUSANTE DEL ESTADO DE POBREZA EN QUE ESTÁ SUMIDA BUENA PARTE DE LA POBLACIÓN, NI SIQUIERA LOS MÁS FÉRREOS DEFENSORES DE NUESTRO ACTUAL MODELO ECONÓMICO SE ATREVEN A ALEGAR QUE



CON ESTA CONTENCIÓN SE FAVORECE LA INVERSIÓN, LA COMPETITIVIDAD Y LA ORIENTACIÓN HACIA EL MERCADO EXTERNO PUES MUCHOS ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE LA ESTRATEGIA DE ESTABLECER LOS SALARIOS CON BASE EN CRITERIOS DE LA INFLACIÓN Y NO DE PRODUCTIVIDAD SOCIAL HA OCASIONADO UNA PÉRDIDA DE CASI EL 80% DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO, COMO UN DATO IMPORTANTE SE SEÑALA DE DICIEMBRE DE 1987 A PRINCIPIOS DEL AÑO 2016, EL SALARIO MÍNIMO REGISTRO UN AUMENTO DE SÓLO 900% MIENTRAS LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA EN ESTE LAPSO AUMENTARON EN 4800% ESTO HACE EVIDENTE QUE LA POLÍTICA DE CONTENCIÓN SALARIAL HA IMPACTADO NEGATIVAMENTE AL MERCADO INTERNO POR ESO POR ESTA RAZÓN HOY EXISTE CONSENSO CON EL SECTOR EMPRESARIAL SOBRE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO Y REPLANTAR NUESTRO FALLIDO ESQUEMA DE DETERMINACIÓN SALARIAL, LA REFORMA EN LA QUE SE ORDENA POR EL PACTO FEDERAL LA DESVINCULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES Y EL PAGO DE SANCIONES O DERECHOS FUE APLAZADA HASTA EL 27 DE ENERO DEL AÑO PASADO, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA REFORMA QUE SE HIZO LOS ARTÍCULOS 26 APARTADO B DE SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFO 41 FRACCIÓN SEGUNDA INCISO A 123 APARTADO A FRACCIÓN SEXTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN SU TRANSITORIO TERCERO ORDENA QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO EN COMENTO TODAS LAS MENCIONES AL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA ÍNDICE, BASE MEDIDA Y REFERENCIA PARA DETERMINAR LA



CONTINUIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES ASÍ COMO CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA QUE EMANE DE TODAS LAS ANTERIORES, SE ENTENDERÁ REFERIDA A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. LA DESVINCULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD BASE MEDIDA O REFERENCIA ECONÓMICA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA REQUIERE DE LA REFORMA A LA LEY QUE SE PRESENTA EN ESTA INICIATIVA EN CADA UNA DE LOS ORDENAMIENTOS QUE CONTENGAN LAS REFERENCIAS AL SALARIO MÍNIMO PARA CAMBIARLO POR EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN QUE DEBERÁ SER DETERMINADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. FACULTAD QUE DEBERÁ EJERCER ANUALMENTE CON EL CAMBIO DE FIJAR EL VALOR DE ESTA UNIDAD EN BASE A LA INFLACIÓN ANUAL LOS BAJOS SALARIOS IGUALMENTE HAN CONDUCTIDO AL SURGIMIENTO DE GRANDES PROBLEMAS FINANCIEROS EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, LO QUE SE REPLICA EN SERVICIOS MÉDICOS PENSIONES Y JUBILACIONES PRECARIAS ENTRE OTROS, PARA PODER UTILIZAR EL SALARIO MÍNIMO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CON UN SOLO PROPÓSITO Y SOLUCIONAR LAS DISTORSIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE ES NECESARIO DESVINCULAR AL SALARIO MÍNIMO DE CIERTOS SUPUESTOS Y MONTOS QUE LO UTILIZAN COMO UNIDAD DE CUENTA EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO REFERIDO Y CONFORME AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL MISMO, ESTE CONGRESO DEL ESTADO CUENTA CON EL TÉRMINO DE UN AÑO COMO MÁXIMO PARA



40

REALIZAR LAS ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS LEYES Y ORDENAMIENTOS DE SU COMPETENCIA SEGÚN SEA EL CASO A EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE BASE, MEDIDA O REFERENCIA Y SUSTITUÍRLA POR LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN FINALMENTE DEBO MENCIONAR QUE NUESTRO MARCO JURÍDICO ESTATAL CUENTA CON 150 NORMAS DE LAS CUALES PROPONEMOS REFORMAR 54 EN DONDE PLANTEEMOS LAS ADECUACIONES A LA NORMATIVA FEDERAL SUSTITUYENDO LA REFERENCIA AL SALARIO MÍNIMO COMO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN POR LA UNIDAD DE MEDIA Y ACTUALIZACIÓN POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CONSIDERADO A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NOS PERMITIMOS SOMETER PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE EXPLORANDO SU APOYO DE USTEDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR ESTE CONGRESO POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA.

PRESIDENTE: PASANDO A LA SIGUIENTE INICIATIVA LA NÚMERO OCHO DE NUESTRA ORDEN DEL DÍA QUISIERA NADA MÁS COMENTARLES A LAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA QUE EN VIRTUD DE QUE DESDE ESTA INICIATIVA HASTA LA INICIATIVA NÚMERO 60 SON



41

SUSCRITAS POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS FRACCIONES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA OMITIRÉ MENCIONAR LOS NOMBRES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES PARA SÓLO REFERIRME ELLOS COMO LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango,

nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Obras Públicas del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia

para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

44

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 29 y 79 de la **Ley de Obras Públicas del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 29.- Las dependencias, entidades, así como los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, cuando por razón del monto de la obra, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, por el costo que éste represente, se podrá contratar sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la obra objeto del contrato no exceda del monto máximo, en base al cual, se podrá contratar directamente, y el cual no deberá exceder de veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, elevada al año, sin considerar el IVA.

Si el monto de la obra supera los máximos a que se refiere el párrafo anterior, pero no excede de ciento diez **veces la Unidad de Medida y Actualización**, elevado al año sin considerar el IVA; el contrato relativo podrá adjudicarse a la persona física o moral que reúna las condiciones necesarias para la realización de la misma, previa invitación que se extenderá a cuando menos tres personas, físicas o morales, que cuenten con la capacidad de respuesta y los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para la ejecución de la obra.

...

Artículo 79.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, serán sancionados por la convocante, tratándose del licitante, con multa hasta de 1000 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, misma que se determinará tomando en cuenta los siguientes criterios:

I a III ...

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.



A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo., a 09 de enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEA AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: DE NO HABER INTERVENCIONES, LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 34 fracción III de la **Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34

I. ...

I....

II. ...

III. Multa de cincuenta hasta cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

IV. ...

V.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para



determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:
Victoria de Durango, Dgo., a 09 de enero de 2017.
RÚBRICA
DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA
RÚBRICA
DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: DE NO HABER INTERVENCIONES, LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS

50

CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.



La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas



52

leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 197 párrafos cuarto y sexto, 215, 228 fracción I inciso b fracción II inciso b de la **Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 197.-

...
...
...

En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el Magistrado Instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre noventa y ciento cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al funcionario omiso. También podrá comisionar al Secretario o Actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsión de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad.

...

Artículo 215.- Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad no cumple con la sentencia o su cumplimiento es excesivo o defectuoso; o, habiéndola cumplido, en cualquier tiempo repite el acto declarado inválido o nulo; o bien, no rinde el informe que corresponda, se le aplicará una multa de diez a sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Independientemente de esta sanción, la Sala del conocimiento comunicará al superior jerárquico de la autoridad de que se trate, la actitud de desobediencia, a fin de que lo conmine al cumplimiento de la resolución, en un plazo de cinco días.

...

Artículo 228.-...

- I. ...
 - a) ...
 - b) Multa de cinco a cien **veces del la Unidad de Medida y Actualización**; y
 - c)
- II.
 - a) ...
 - b) Multa de cinco a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**;
 - c) ...
 - d) ...
 - e) ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del

salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: DE NO HABER INTERVENCIONES, LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que



evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio,

pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 115 fracción II de la **Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

- I. Apercibimiento;
- II. Multa de diez a doscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;
- III. ...
- IV. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la



60

vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

61

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 203 fracción IV sección 4 inciso I desglose a, y 371 fracción I inciso b fracción II inciso b fracción III inciso b fracción IV inciso b fracción V inciso b fracción VI inciso b fracción VII inciso b de la **Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 203.-

1.- ...

2.- ...

I a IV ...

3....

4.....

I.

a) ...

b) El cuarenta y ocho por ciento del **valor de la Unidad de Medida y Actualización** vigente para el año de la elección.

...

II ...

III ...

a) a c) ...

Artículo 371.-

1. ...

I.

a) ...

b) Con multa de hasta diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad de la falta;

c) ...

d) ...

II.

a) ...;

b) Con multa de hasta cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad de la falta; y

c) ...

III.

a) ...

b) Con multa de hasta mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y

c) ...

IV.

a) ...

b) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y

62

- c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en el inciso anterior: con multa de hasta cien mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

V.;

a);

- b) Con multa de hasta cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad de la falta; y

c);

VI.;

a); y

- b) Con multa de hasta cinco mil **veces del la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad de la falta.

VII.;

a);

- b) Con multa de hasta cinco mil **veces Unidad de Medida y Actualización**;

....;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA



DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEA AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mitad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las



obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y

que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 109 párrafo segundo, 139 y 155 de la **Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 109.- ...

La falta de cumplimiento de esa obligación será motivo de suspensión de las obras y se sancionará con multa de 5 a 20 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 139.- Los dueños y conductores de carros fúnebres están obligados a exhibir el permiso y el último recibo de pago siempre que sea requerido para ello por la autoridad competente. Incurriendo en una multa de una a dos **veces la Unidad de Medida y Actualización** al que se negara hacerlo.

Artículo 155.- Los derechos por Servicios Catastrales, se sujetarán al catálogo de tarifas que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales, para las cuales se tomará como base **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a



67

efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.



Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mitad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 29, 134 en su fracción II, 138 y 147 de la **Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 29.- Para los efectos de este Título, se entiende por **Unidad de Medida y Actualización**, como la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Artículo 134.-...

I.;

II. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la realización de la infracción o ilícito**;

III a la IX...

...

Artículo 138.- Si una vez impuestas las sanciones manifestadas en la presente Ley y vencido el plazo concedido para subsanar la o las infracciones cometidas y no hubiesen sido atendidas, podrá imponerse multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas, que en estos casos se impongan exceda de veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** en el momento de imponerlas.

Artículo 147.- Al que cometa de manera imprudencial, alguna infracción o algunos de los hechos u omisiones considerados como delitos en el artículo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como la reparación del daño; Si los hechos u omisiones devienen de manera intencional la sanción consistirá en multa de quinientos a veinte mil días de salario mínimo vigente en el Estado y la reparación del daño, según los daños que se causen y que de manera fundada se determinen, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor conforme a lo dispuesto por el Código Penal en vigor.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN



72

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango,

nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente

pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.



75

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 64 y 98 fracción II de la **Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 64. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 69 fracción X y 70 fracción VII, de esta Ley, el Gobierno del Estado otorgará a las empresas un subsidio único de dos meses del **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, por cada persona con discapacidad y adultos mayores que contraten, independientemente de cualquier otro incentivo que pudiera corresponderles de conformidad con lo señalado en esta Ley.

...
...
...
...
...
...

ARTÍCULO 98. ...:

- ...
- I. ...
- II. Multa hasta por mil **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, la que hará efectiva la Secretaría de Finanzas y de Administración, previa resolución emitida por la Secretaría.
- III. ...
- ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.



76

RÚBRICA
DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA
RÚBRICA
DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO SERGIO URIBE RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA
INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos

supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 30, 42 párrafo segundo, 48 y 60 de la **Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 36.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo que antecede, el ente fiscalizable, sin causa justificada, no presenta el informe requerido, la Entidad amonestará a los servidores públicos responsables, apercibiéndolos que de no presentarlo, se harán acreedores a una multa de cien a seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la que tendrá el carácter previsto en el artículo 46.

...

Artículo 42.- ...

Las indemnizaciones se fincarán independientemente de las sanciones administrativas que sean procedentes y de aquellas que sean objeto de otras leyes, y de las sanciones pecuniarias correspondientes, las que en su caso no excederá de 600 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, excepto el caso previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 45.

Artículo 48.-El Auditor Superior, bajo su más estricta responsabilidad, podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, justificando plenamente las causas de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de veinte veces **la Unidad de Medida y Actualización** vigente en la fecha en que se cometa la infracción. El trámite anterior procederá siempre y cuando lo solicite el infractor y el procedimiento haya concluido. La Autoridad Resolutora determinará si ha lugar o no a la abstención.

Artículo 60.-

Si la autoridad ejecutora no da cumplimiento a la orden de suspensión o admisión de la garantía, la autoridad competente declarará la nulidad de las acciones realizadas con violación a la misma e impondrá la autoridad renuente una multa de una a tres veces la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes.

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS



ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

81

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente Iniciativa con:

PREOYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 29 párrafo segundo de la **Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 29.Reglas y principios en las audiencias.

...

Las audiencias serán conducidas por el juez, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente; serán públicas, salvo que, por razones de seguridad del tribunal o de los intervinientes, el juez determine que se efectúen a puerta cerrada; y se llevarán a cabo con o sin la asistencia de las partes. Quien injustificadamente, a criterio del juez, no acuda a las audiencias, será sancionado con multa de treinta a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, vigente en el Estado de Durango.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA



85

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH**

NÁPOLES GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de

Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 30, de la **Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 30. Póliza de fianza personal.

Es admisible la póliza de fianza personal cuando el monto de la garantía económica no exceda del equivalente a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Salvo que se trate de empresas dedicadas a otorgar fianzas, el fiador deberá responder las preguntas que le haga el Juez de Control sobre su solvencia económica. El valor de la póliza será, al menos, de dos tantos del monto fijado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA



DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL

ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA
GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Educación del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos

supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 38 y 179 párrafo segundo fracción I de la **Ley de Educación del el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 38

A quienes lucren o pretendan lucrar con los uniformes escolares y libros de textos gratuitos, o su material complementario, se les aplicará una multa de seis a sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, sin perjuicio de las sanciones penales que corresponda. Si el infractor fuese jornalero u obrero no podrá ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo de una semana. Si el infractor es funcionario o trabajador de la Secretaría, será sancionado de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango

ARTÍCULO 179

...

I a la IV...

...

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, vigente en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; y/o

II.- ...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil



dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ

DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley General de Desarrollo Urbano Para el Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.



Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 3, 324 y 328 bis de la **Ley General de Desarrollo Urbano Para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 3.-. . .

I a la LVII...

LVIII.- Vivienda de Interés Social: La vivienda, progresiva o terminada, que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 M2 de terreno, con una superficie construida máxima de 80 M2, cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte veces **la Unidad de Medida y Actualización** elevado al año, y que no cuente con todos los servicios de urbanización;

LIX.- Vivienda Popular: La vivienda terminada que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 M2 de terreno, con una superficie construida máxima de 130 M2, cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización** elevado al año y con todos los servicios de urbanización;

LX y LXI...

Artículo 324-

I.;

II. Multa equivalente a uno y hasta diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, o hasta el 20% del valor comercial de los inmuebles;

III. a la VIII . . .

Artículo 328 bis.- Los constructores de fraccionamientos o condominios que dejen de cumplir con los plazos y términos establecidos en el artículo 229 de esta ley y en las autorizaciones municipales de construcción, serán sancionados por el Ayuntamiento, previo al procedimiento respectivo con amonestación por escrito; multa de quinientos y hasta diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** y la suspensión temporal; o en su caso definitiva, para obtener autorizaciones futuras para la construcción de fraccionamientos. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y/o medidas de seguridad previstas en otros ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

**PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.**



98

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ,** integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES:

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

100

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 94 fracciones I y II así como su párrafo segundo de la **Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango** para quedar como sigue:

ARTÍCULO 94.- ...

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien incurra en la comisión de las infracciones administrativas previstas en las fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVI, XVIII, XX y XXIV del artículo 92 de esta Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 20,000 **veces la Unidad de Medida y Actualización** a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XIX, XXI, XXII y XXIII del artículo 92 de esta Ley.

En términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley General, para la imposición de las multas servirá de base **la Unidad de Medida y Actualización** vigente al momento de cometerse la infracción.

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA



DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS FORESTALES, FRUTÍCOLAS Y PESCA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las

diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo,

105

para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 43 fracciones del I al III de la **Ley de Cultural Física y Deporte del Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 43. A los deportistas duranguenses que hubieren competido oficialmente, representando a México se les otorgará por parte del Gobierno del Estado, una pensión mensual de acuerdo a lo siguiente:

I. En juegos Olímpicos y Paralímpicos una pensión mensual de hasta cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

II. En Juegos Panamericanos una pensión mensual de hasta ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, y

III. En Juegos Centroamericanos una pensión mensual de hasta sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Para el otorgamiento, suspensión o revocación de dicha pensión, se estará a lo que determine el Reglamento correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.



ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA MAR GRECIA OLIVA GUERRERO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CONDOMINIOS DEL
ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA
GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 43 fracciones del I al III de la **Ley de Cultural Física y Deporte del Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 43. A los deportistas duranguenses que hubieren competido oficialmente, representando a México se les otorgará por parte del Gobierno del Estado, una pensión mensual de acuerdo a lo siguiente:

I. En juegos Olímpicos y Paralímpicos una pensión mensual de hasta cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

II. En Juegos Panamericanos una pensión mensual de hasta ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, y

III. En Juegos Centroamericanos una pensión mensual de hasta sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Para el otorgamiento, suspensión o revocación de dicha pensión, se estará a lo que determine el Reglamento correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil



110

dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ



111

DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ARANCELES DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO, ÁRBITROS, DEPOSITARIOS, INTÉRPRETES, TRADUCTORES Y PERITOS EN ASUNTOS JURÍDICOS DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Aranceles de los Licenciados en Derecho, Árbitros, Depositarios, Intérpretes, Traductores y Peritos en Asuntos Jurídicos de Cualquier Naturaleza en el Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que

evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio,

113

pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 10, 16, 22 fracciones del I al VI, 25 y 36 fracciones I y II de la **Ley de Aranceles de los Licenciados en Derecho, Árbitros, Depositarios, Intérpretes, Traductores y Peritos en Asuntos Jurídicos de Cualquier Naturaleza en el Estado de Durango** para quedar como sigue:



Artículo 10.- Los Licenciados en Derecho, cobrarán a quienes presten sus servicios, lo señalado en el contrato y a falta de éste:

I.- Por vista o lectura de documentos de cualquier clase en su despacho, hasta diez fojas, la cantidad equivalente a tres punto setenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Si excediesen de diez fojas, el 10% de la cantidad anterior, por cada hoja de exceso.

Si la vista o lectura de documentos se efectúa fuera del despacho del profesionista, se cobrará el doble de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior.

II.- Por cada consulta o conferencia verbal en su despacho o en cualquier otra parte dentro del perímetro de la ciudad, el equivalente a tres punto setenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** por cada media hora o fracción.

III.- Por cada consulta que requiera contestación por escrito, se cobrará lo equivalente de cinco a setenta y cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la importancia, dificultades técnicas y extensión del escrito.

IV.- Por intervenir en audiencias, juntas o cualquier otra diligencia de carácter jurídico, ante cualquier funcionario o autoridad, el equivalente a tres punto setenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** por cada media hora o fracción.

V.- Si mediante la intervención del Licenciado en Derecho se resuelve el negocio en forma extra-judicial, cobrará las cuotas fijadas en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de esta Ley. Tomando en cuenta el resultado obtenido para el cliente; en el entendido de que sólo se pagarán en este caso las cuotas fijadas para el escrito de demanda.

VI.- Por cada escrito de cualquier clase, se cobrará el equivalente hasta tres punto setenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, tomando en cuenta su extensión e importancia.

Artículo 16.- En cualquier negocio de cuantía no determinada, se cobrará la cantidad equivalente de tres punto setenta a setenta y cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización**, atendiendo la importancia y a las dificultades técnicas del negocio, según el prudente arbitrio del Juez

Artículo 22.- ...:

I.- Por solicitar y obtener la libertad bajo caución, se cobrará la cantidad equivalente de tres punto setenta a veintitrés **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

II.- Por solicitar y obtener la libertad por desvanecimiento de datos, la cantidad equivalente de siete punto cinco a cuarenta y cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

III.- Por solicitar y obtener la libertad preparatoria o por obtener la libertad por indulto necesario o por gracia cobrará la cantidad equivalente de tres punto setenta a veintitrés **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

IV.- Por la defensa general de proceso en Primera Instancia, cobrará la cantidad equivalente de quince a ciento cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

V.- Por la defensa ante los Jueces Municipales o Auxiliares, cobrará la cantidad equivalente de tres a doce **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

VI.- Por la defensa del proceso en Segunda Instancia, cobrará la cantidad equivalente de once hasta cuarenta y cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según la gravedad del delito.

Artículo 25.- Cuando el Licenciado en Derecho salga del lugar de su residencia, devengará diariamente además de los honorarios que señalan las disposiciones de esta Ley, la cantidad equivalente a siete punto cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización** desde el día de su salida hasta el día de su regreso, inclusive, considerándose completos los días aún cuando no lo fueren, más los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y estancia del Licenciado en Derecho que serán a cargo del cliente.

Artículo 33.- Los Intérpretes y Traductores cobrarán:

115

- I.- Por asistencia ante las Autoridades Judiciales para traducir declaraciones en idioma extranjero, cobrarán la cantidad equivalente a cinco **veces la Unidad de Medida y Actualización** por cada hora o fracción.
- II.- Por traducción de cualquier documento, la cantidad equivalente a una **vez la Unidad de Medida y Actualización** por cuartilla.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN



116

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto

de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Agua para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia



para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 241 y 250 de la **Ley de Agua para el Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 241.- Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la autoridad Estatal, Municipal o sus descentralizadas con multas que serán equivalentes a las **veces la Unidad de Medida y Actualización** que corresponda en el momento en que se cometa la infracción:

I a la IV...

; y

V.- Cualquier otra infracción se sancionará con 100 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 250.-

I.- Con multa de quinientos a dos mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, tratándose de las fracciones I, IV y VII;

II.- Con multa de mil a cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en caso de la fracción II;

III.- Con multa de cien a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, tratándose de la fracción III;

IV.- Con multa de mil a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, tratándose de las fracciones V y VI; y

V.- Con multa de hasta quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en el caso de la fracción VIII.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.



120

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO

121

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

123

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 42 en su fracción segunda, 45 en su fracción segunda, 186, 366 en su párrafo quinto, 381, 382 fracción segunda, 384 párrafos segundo y tercero y 431 del **Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 42.- Son correcciones disciplinarias:

I.- ...;

II.- Multa por el equivalente a entre tres y quince **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** al que cometa la falta que amerite corrección. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingreso;

III a la IV...

Artículo 45...

I.- ...;

II.- Multa por el equivalente a entre uno y treinta **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** a quién realizó la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros,



124

obreros y trabajadores la multa no deberá de exceder de una vez **del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de ingreso;
III a la V...
...

Artículo 186.- El Ministerio Público podrá dejar de ejercitar acción penal cuando se trate de los delitos de lesiones que no pongan en peligro la vida, tarden en sanar menos de quince días y no tengan consecuencias a sanidad, y en los patrimoniales cuyo monto no exceda del importe de cincuenta **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, cuando se trate de un delincuente primario y realice convenio con el ofendido o sus causahabientes, ante el Ministerio Público, de la forma en que reparará el daño y los perjuicios causados.

Artículo 366.-...

...
...
...

Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará dentro de cuarenta y ocho horas la resolución que proceda. Si se estima fundado el recurso, la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia requerirá al juez para que cumpla con las obligaciones determinadas en la ley en un plazo no mayor de dos días, sin perjuicio de las responsabilidades que le resulten. La falta del informe a que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de veinte a cien veces **del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** vigente en el momento y lugar en que hubiere ocurrido la omisión.

Artículo 381.- La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción de dos **Unidades de Medida y Actualización** elevadas al año, vigente. Sin embargo, la autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las particulares circunstancias personales del imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de la caución hasta la cantidad equivalente a la percepción de cuatro **Unidades de Medida y Actualización** vigente.

Artículo 382.- ...

....:

I.-

II.- Que el monto de la caución no exceda de cinco **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevada al año**;

Artículo 384.- ...

La fianza personal solamente podrá admitirse cuando el monto de la caución no exceda de **veinte veces la Unidad de Medida y Actualización** y el fiador acredite su solvencia o idoneidad.

Cuando la fianza sea por cantidad mayor de **veinte veces la Unidad de Medida y Actualización**, se registrará por lo dispuesto en los artículos relativos a la fianza legal o judicial del

...

Artículo 431.- Cuando se deseche la recusación se impondrá al recusante multa equivalente de cinco a quince **veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS
MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



126

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ARANCELES DE LOS ARQUITECTOS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Aranceles de los Arquitectos**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado

que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 23 en sus párrafos séptimo octavo y noveno así como en sus tres tablas de la **Ley de Aranceles de los Arquitectos**, para quedar como sigue:

Artículo 23.- Cuando un proyecto arquitectónico sea utilizado o repetido en una obra determinada, se cobrará de acuerdo a la siguiente Tarifa:

POR LA SEGUNDA UNIDAD, el 40% de los honorarios correspondientes cobrados en la primera unidad.

POR LA TERCERA UNIDAD, el 30% de los honorarios correspondientes cobrados en la primera unidad.

POR LA CUARTA UNIDAD, el 20% de los honorarios correspondientes cobrados en la primera unidad.

POR LA QUINTA UNIDAD, el 10% de los honorarios correspondientes cobrados en la primera unidad.

POR LA SEXTA UNIDAD y SUBSECUENTES CADA UNA, el 5% de los honorarios correspondientes cobrados en la primera unidad.

ARANCELES DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO CON % SOBRE LIM. INF. Y # veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	DIFERENCIA	100 FIJO TASA	100 % LIM. INF.	# VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN.
1	100,000	99,999	11,300	11.30	3.71
100,001	200,000	99,999	22,400	11.20	7.36
200,001	300,000	99,999	33,300	11.10	10.94
300,001	400,000	99,999	44,000	11.00	14.45
400,001	500,000	99,999	54,500	10.90	17.90
500,001	600,000	99,999	64,800	10.80	21.28
600,001	700,000	99,999	74,900	10.70	24.60
700,001	800,000	99,999	84,800	10.60	27.85
800,001	900,000	99,999	94,500	10.50	31.03
900,001	1,000,000	99,999	104,500	10.40	34.15
1,000,001	2,000,000	999,999	202,200	10.11	66.40
2,000,001	3,000,000	999,999	294,600	9.82	96.75
3,000,001	4,000,000	999,999	381,200	9.53	125.19
4,000,001	5,000,000	999,999	462,000	9.24	151.72
5,000,001	6,000,000	999,999	537,000	8.95	176.35
6,000,001	7,000,000	999,999	606,200	8.66	199.08
7,000,001	8,000,000	999,999	669,600	8.37	219.90
8,000,001	9,000,000	999,999	727,200	8.08	238.82
9,000,001	10,000,000	999,999	779,000	7.79	255.83
10,000,001	11,000,000	999,999	825,000	7.50	270.94
11,000,001	16,000,000	4,999,999	1,176,000	7.35	386.21
16,000,001	21,000,000	4,999,999	1,512,000	7.20	496.55
21,000,001	26,000,000	4,999,999	1,833,000	7.05	601.97
26,000,001	31,000,000	4,999,999	2,139,000	6.90	702.46
31,000,001	36,000,000	4,999,999	2,430,000	6.75	798.03

36,000,001	41,000,000	4,999,999	2,706,000	6.60	888.67
41,000,001	46,000,000	4,999,999	2,967,000	6.45	974.38
46,000,001	51,000,000	4,999,999	3,213,000	6.30	1,055.17
51,000,001	56,000,000	4,999,999	3,444,000	6.15	1,131.03
56,000,001	61,000,000	4,999,999	3,660,000	6.00	1,281.77
61,000,001	66,000,000	4,999,999	3,920,400	5.94	1,287.49
66,000,001	71,000,000	4,999,999	4,174,800	5.88	1,371.03
71,000,001	76,000,000	4,999,999	4,433,200	5.82	1,452.61
76,000,001	81,000,000	4,999,999	4,665,500	5.76	1,532.22
81,000,001	86,000,000	4,999,999	4,902,000	5.70	1,609.85
86,000,001	91,000,000	4,999,999	5,132,400	5.64	1,605.52
91,000,001	96,000,000	4,999,999	5,356,000	5.50	1,759.21
96,000,001	101,000,000	4,999,999	5,575,200	5.52	1,830.94
101,000,001	106,000,000	4,999,999	5,787,600	5.46	1,900.69
106,000,001	111,000,000	4,999,999	5,984,000	5.40	1,968.47
111,000,001	151,000,000	39,999,999	7,987,900	5.29	2,623.28
151,000,001	191,000,000	39,999,999	9,893,000	5.18	3,249.20
191,000,001	231,000,000	39,999,999	11,711,700	5.07	3,846.21
231,000,001	271,000,000	39,999,999	13,441,600	4.96	4,414.32
271,000,001	311,000,000	39,999,999	15,083,500	4.85	4,953.53
311,000,001	351,000,000	39,999,999	16,637,400	4.74	5,463.84
351,000,001	391,000,000	39,999,999	18,103,300	4.63	5,945.25
391,000,001	431,000,000	39,999,999	19,481,200	4.52	6,397.77
431,000,001	471,000,000	39,999,999	20,771,100	4.41	6,821.38
471,000,001	511,000,000	39,999,999	21,973,000	4.30	7,216.09
511,000,001	561,000,000	49,999,999	23,898,600	4.26	7,848.47
561,000,001	611,000,000	49,999,999	25,784,200	4.22	8,467.72
611,000,001	661,000,000	49,999,999	27,629,800	4.18	9,073.83
661,000,001	711,000,000	49,999,999	29,435,400	4.14	9,666.80
711,000,001	761,000,000	49,999,999	31,201,000	4.10	10,246.63
761,000,001	811,000,000	49,999,999	32,926,600	4.06	10,813.33
811,000,001	861,000,000	49,999,999	34,612,200	4.02	11,366.90
861,000,001	911,000,000	49,999,999	36,257,800	3.98	11,907.32
911,000,001	961,000,000	49,999,999	37,863,400	3.94	12,434.61
961,000,001	999,000,000	38,999,999	39,000,000	3.90	12,807.88
1,000,000,000 Ó MÁS			38,000,000	3.80	12,479.47

ARANCELES DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIÓN CON % SOBRE LIM. INF. Y # veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	DIFERENCIA	100 FIJO TASA	100 % LIM. INF.	# VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN.
1	100,000	99,999	26,280	26.28	8.63
100,001	200,000	99,999	52,120	26.06	17.12
200,001	300,000	99,999	77,520	25.84	25.46

300,001	400,000	99,999	102,480	25.62	33.66
400,001	500,000	99,999	127,000	25.40	41.71
500,001	600,000	99,999	151,080	25.18	49.62
600,001	700,000	99,999	174,720	24.96	57.38
700,001	800,000	99,999	197,920	24.74	65.00
800,001	900,000	99,999	220,680	24.52	72.47
900,001	1,000,000	99,999	243,000	24.30	79.80
1,000,001	2,000,000	999,999	472,600	23.63	155.21
2,000,001	3,000,000	999,999	680,800	22.96	226.21
3,000,001	4,000,000	999,999	891,600	22.29	292.81
4,000,001	5,000,000	999,999	1,081,000	21.62	355.01
5,000,001	6,000,000	999,999	1,257,000	20.95	412.81
6,000,001	7,000,000	999,999	1,419,600	20.20	466.21
7,000,001	8,000,000	999,999	1,568,800	19.61	515.21
8,000,001	9,000,000	999,999	1,704.600	18.94	559.80
9,000,001	10,000,000	999,999	1,827,000	18.27	600.00
10,000,001	11,000,000	999,999	1,936,000	17.60	635.80
11,000,001	16,000,000	4,999,999	2,756,800	17.23	905.35
16,000,001	21,000,000	4,999,999	3,540,600	16.86	1,162.76
21,000,001	26,000,000	4,999,999	4,287,400	16.49	1,408.01
26,000,001	31,000,000	4,999,999	4,997,200	16.12	1,641.12
31,000,001	36,000,000	4,999,999	5,670,000	15.75	1,862.07
36,000,001	41,000,000	4,999,999	6,305,800	15.38	2,070.87
41,000,001	46,000,000	4,999,999	6,904,600	15.01	2,267.52
46,000,001	51,000,000	4,999,999	7,466,400	14.64	2,452.02
51,000,001	56,000,000	4,999,999	7,991,200	14.27	2,624.37
56,000,001	61,000,000	4,999,999	8,479,000	13.90	2,784.56
61,000,001	66,000,000	4,999,999	9,088,200	13.77	2,984.63
66,000,001	71,000,000	4,999,999	9,684.400	13.64	3,180.43
71,000,001	76,000,000	4,999,999	10,267,600	13.51	3,371.95
76,000,001	81,000,000	4,999,999	10,837,800	13.38	3,559.21
81,000,001	86,000,000	4,999,999	11,395,000	13.25	3,742.20
86,000,001	91,000,000	4,999,999	11,939,200	13.12	3,920.92
91,000,001	96,000,000	4,999,999	12,470,400	12.99	4,095.37
96,000,001	101,00,000	4,999,999	12,988,600	12.85	4,265.55
101,000,001	106,000,000	4,999,999	13,493,000	12.73	4,431.46
106,000,001	111,000,000	4,999,999	13,986,000	12.60	4,593.10
111,000,001	151,000,000	39,999,999	18,633,400	12.34	6,119.34
151,000,001	191,000,000	39,999,999	23,072,800	12.08	7,577.27
191,000,001	231,000,000	39,999,999	27,304,200	11.82	8,966.90
231,000,001	271,000,000	39,999,999	31,327,600	11.56	10,288.21
271,000,001	311,000,000	39,999,999	35.143.000	11.30	11,541.22
311,000,001	351,000,000	39,999,999	38,750.400	11.04	12,725.91
351,000,001	391,000,000	39,999,999	42,149,800	10.78	13,842.30
391,000,001	431,000,000	39,999,999	45,341,200	10.52	14,890.38
431,000,001	471,000,000	39,999,999	48,324,600	10.26	15,870.15

471,000,001	511,000,000	39,999,999	51,100,000	10.00	16,781.61
511,000,001	561,000,000	49,999,999	55,595,100	9.91	18,257.83
561,000,001	611,000,000	49,999,999	60,000,200	9.82	19,704.50
611,000,001	661,000,000	49,999,999	64,315,300	9.73	21,121.61
661,000,001	711,000,000	49,999,999	68,540,400	9.64	22,509.16
711,000,001	761,000,000	49,999,999	72,675,500	9.55	23,867.16
761,000,001	811,000,000	49,999,999	76,720.600	9.46	25,195.60
811,000,001	861,000,000	49,999,999	88,675,700	9.37	26,494.48
861,000,001	911,000,000	49,999,999	84,540,000	9.28	27,763.81
911,000,001	961,000,000	49,999,999	88,315,900	9.19	29,003.58
961,000,001	999,999,999	38,999,998	91,000,000	9.10	29,885.06
1,000,000,000 Ó MÁS			90,000,000	9.00	29,556.65

ARANCELES DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON %
SOBRE LIM. INF. Y # veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	DIFERENCIA	100 FIJO TASA	100 % LIM. INF.	# VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.
1	100,000	99,999	37,490	37.49	12.31
100,001	200,000	99,999	74,360	37.18	24.42
200,001	300,000	99,999	110,610	36.87	36.33
300,001	400,000	99,999	146,240	36.56	48.03
400,001	500,000	99,999	181,250	36.25	59.52
500,000	600,000	99,999	215,640	35.94	70.82
600,001	700,000	99,999	249,410	35.63	81.91
700,001	800,000	99,999	282,560	35.32	92.79
800,001	900,000	99,999	315,090	35.01	103.48
900,001	1,000,000	99,999	347,000	34.70	113.96
1,000,001	2,000,000	999,999	674,800	33.74	221.61
2,000,001	3,000,000	999,999	983,400	32.78	322.96
3,000,001	4,000,000	999,999	1,272,800	31.82	418.00
4,000,001	5,000,000	999,999	1,543,000	30.86	506.73
5,000,001	6,000,000	999,999	1,794,000	29.98	589.16
6,000,001	7,000,000	999,999	2,025,800	28.94	665.29
7,000,001	8,000,000	999,999	2,238,400	27.98	735.11
8,000,001	9,000,000	999,999	2,431,800	27.02	798.62
9,000,001	10,000,000	999,999	2,606,000	26.06	855.63
10,000,001	11,000,000	999,999	2,761,000	25.10	906.73
11,000,001	16,000,000	4,999,999	3,932,800	24.58	1,291.56
16,000,001	21,000,000	4,999,999	5,052,600	24.06	1,659.31
21,000,001	26,000,000	4,999,999	6,120,400	23.54	2,009.98
26,000,001	31,000,000	4,999,999	7,136,200	23.02	2,343.58
31,000,001	36,000,000	4,999,999	8,100,000	22.50	2,660.10
36,000,001	41,000,000	4,999,999	9,011,800	21.98	2,959.54
41,000,001	46,000,000	4,999,999	9,871,600	21.46	3,241.90

46,000,001	51,000,000	4,999,999	10,679,400	20.94	3,507.19
51,000,001	56,000,000	4,999,999	11,435,200	20.42	3,755.40
56,000,001	61,000,000	4,999,999	12,139,000	19.90	3,986.54
61,000,001	66,000,000	4,999,999	13,008,600	19.71	4,272.12
66,000,001	71,000,000	4,999,999	13,859,200	19.52	4,551.46
71,000,001	76,000,000	4,999,999	14,690,800	19.33	4,824.56
76,000,001	81,000,000	4,999,999	15,503,400	19.14	5,091.43
81,000,001	86,000,000	4,999,999	16,257,000	18.55	5,352.05
86,000,001	91,000,000	4,999,999	17,071,600	18.76	5,606.44
91,000,001	96,000,000	4,999,999	17,027,200	18.57	5,894.58
96,000,001	101,000,000	4,999,999	18,560,800	18.38	6,096.49
101,000,001	106,000,000	4,999,999	19,201,400	18.19	6,332.15
106,000,001	111,000,000	4,999,999	19,980,000	18.00	6,561.58
111,000,001	151,000,000	39,999,999	26,606,200	17.62	8,737.67
151,000,001	191,000,000	39,999,999	32,928,400	17.34	10,813.92
191,000,001	231,000,000	39,999,999	38,946,600	16.86	12,790.34
231,000,001	271,000,000	39,999,999	44,660,800	16.48	14,666.93
271,000,001	311,000,000	39,999,999	50,071,000	16.10	16,443.68
311,000,001	351,000,000	39,999,999	55,177,200	15.72	18,120.59
351,000,001	391,000,000	39,999,999	59,979,400	15.34	19,697.67
391,000,001	431,000,000	39,999,999	64,477,600	14.96	21,174.91
431,000,001	471,000,000	39,999,999	68,671,800	14.58	22,552.32
471,000,001	511,000,000	39,999,999	72,562,000	14.20	23,829.89
511,000,001	561,000,000	49,999,999	78,932,700	14.07	25,922.07
561,000,001	611,000,000	49,999,999	85,173,400	13.94	27,971.56
611,000,001	661,000,000	49,999,999	91,284,100	13.81	29,978.36
661,000,001	711,000,000	49,999,999	97,264,800	13.68	31,942.46
711,000,001	761,000,000	49,999,999	103,115,500	13.55	33,863.88
761,000,001	811,000,000	49,999,999	108,836,200	13.42	35,742.59
811,000,001	861,000,000	49,999,999	114,426,900	13.29	37,578.62
861,000,001	911,000,000	49,999,999	119,887,600	13.16	39,371.95
911,000,001	961,000,000	49,999,999	125,218,300	13.03	41,122.59
961,000,001	999,999,999	38,999,998	129,000,000	12.90	42,364.53
1,000,000,000 Ó MÁS			128,000,000	12.80	42,036.12

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.



ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ



135

GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la

competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

137

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 61 párrafo primero de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 61.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionadas tratándose de proveedores, con multa de 10 a 1000 veces **el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**. Los criterios de aplicación de tales sanciones se establecerán en el reglamento.

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



139

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY CONTRA EL LUCRO INMODERADO DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Contra el Lucro Inmoderado**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a



141

la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

142

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 3, 5, 6 y 7 de la **Ley Contra el Lucro Inmoderado**, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Se aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y multa de tres a 75 quince **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, a toda persona que sin motivo ni justificación, almacene artículos de consumo necesario, por un período mayor de tres meses sin efectuar operaciones de venta, a no ser que exista algunas de las siguientes circunstancias que en todo caso deberán comprobarse:

I a la II.- ...

Artículo 5.- Se autoriza al Departamento de Economía y Estadística del Gobierno del Estado, para que directamente o por conducto de las autoridades municipales, solicite de los almacenistas, productores y comerciantes, información acerca de las cantidades de artículos de consumo necesario que tengan en existencia destinados para especulación, estando obligados a proporcionar los informes solicitados dentro del término improrrogable de cinco días. Si en dicho término no se rinde el informe el infractor será sancionado con multa de tres a diez **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por** la primera omisión, aumentándose en igual proporción por cada una de las subsiguientes y observándose lo mismo en caso de que el informe sea proporcionado con datos falsos.

Artículo 6.- Quien realice operaciones de venta a precios que produzcan lucro inmoderado, mercancías de las señaladas en el artículo cuarto, será castigado con pena de tres meses a dos años de prisión y multa de tres a quince **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 7.- Cuando los productores, distribuidores, comisionistas, comerciantes y en general cualquiera persona, con el fin de obtener lucro inmoderado, concerten actos tendientes a elevar en forma exagerada los precios de las mercancías de consumo necesario, serán sancionados con pena de dos a nueve años de prisión y multa de tres veinticinco **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, por cada acto concertado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a



143

efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediat o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 61, 72, 73 fracción primera, 119 párrafo segundo, 167, 189, 263, 352, 357, 391, 426, 559, 715, 735, 850, 942, 945 y 980 del **Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 61.- ...

La violación a lo mandado por este precepto se sancionará de acuerdo con las disposiciones de este Código y, a falta de regulación expresa, mediante la imposición de una multa en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 72.- Los tribunales no admitirán nunca recursos o incidentes ajenos al negocio principal, notoriamente frívolos o improcedentes. Los desecharán de plano sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo; e impondrán una multa equivalente a **cien veinte veces la Unidad de Medida y Actualización**, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, tanto al actor o a sus representantes legítimos, y al Licenciado en Derecho que los asesore.

Artículo 73.-...



147

I.- La multa por cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia.

Artículo 119.- ...

En este caso, las notificaciones se firmarán por el notificador y por la persona a quien se hiciere. Si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el notificador. Estos testigos no podrán negarse a hacerlo bajo pena de multa por la cantidad equivalente a diez **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 167.- Cuando no procede la inhibitoria debe pagar las costas el que la promovió y una multa equivalente a **sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización**, en beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 189.- Cuando se declare improcedente o no probada la causa de recusación, se impondrá al recusante una multa hasta el equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Además esta circunstancia se anotará en el Registro Judicial para acumularse según lo previsto por el Artículo 61 de este Código.

Artículo 263.- En el caso de que se declare infundada e improcedente la declinatoria o el promovente se desista de ella, deberá pagar las costas causadas y se le impondrá una multa equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en favor del Fondo auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 352.- En caso de ser desechada la recusación se impondrá al recusante una multa equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 357.- Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregaran las cédulas de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitados para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta por quince días o multa en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, que se aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a declarar.

Artículo 391.- ...

Los peritos citados oportunamente serán sancionados, en caso de que no concurran, con una multa equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 426.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por ministerio de ley:



I.- Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no pase de 50 veces **la Unidad de Medida y Actualización**, a excepción de las dictadas en las controversias en materia de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a habitación.

Artículo 559.- Hecho el avalúo, se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de Edictos que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería Municipal correspondiente, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha del remate, igual plazo. Si el valor de la cosa pasare del equivalente a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, se insertarán además los Edictos en un periódico de información. A petición de cualquiera de las partes y a su costa, el Juez puede usar, además de los dichos, algún otro medio de publicidad para convocar postores.

Artículo 715.- Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en Derecho o hubiere recurso ordinario de la resolución reclamada, será desechada por el Tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado solidariamente, una multa que no exceda del equivalente a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 735.- Si el síndico no presentare el informe al principiar la junta, perderá el derecho de cobrar honorarios y será removido de plano, imponiéndole además una multa de cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 850.- El juez pondrá a disposición del partidor los autos y bajo inventario los papeles y documentos relativos al caudal para que proceda a la partición señalándole un término que nunca excederá de veinticinco días para que presente el proyecto partitorio bajo el apercibimiento de perder los honorarios que devengare, ser separado de plano de su encargo y de multa de veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 942.- En los casos a que se refiere el artículo 938, el recibo se firmará por la persona a quien se hiciere la citación. Si no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego un testigo, si no quisiera firmar o presentar testigos que lo hagan, firmará el testigo requerido al efecto por el notificador. Este testigo no puede negarse, bajo multa de treinta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 945.- Si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente **hasta de** treinta días **veces la Unidad de Medida y Actualización**, que se aplicará al reo por vía de indemnización y sin que se justifique haberse hecho el pago, no se citará de nuevo para el juicio.

Artículo 980.- Si por cualquier circunstancia la audiencia no puede celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes. Las partes deberán presentar a sus testigos y peritos. De manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo, se impondrá al actuario del juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los segundos, citándolos así mismo para la audiencia respectiva, en la que deberán rendir dictamen. Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada; y al promovente de la prueba, de imponerle una multa en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, hasta por el equivalente de **setenta veces la Unidad de Medida y Actualización**, en caso de que el señalamiento de domicilio resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante. Las partes en caso de que se ofrezca la prueba confesional, deberán ser citadas con apercibimiento de ser declaradas confesas de las

posiciones que se les articulen y sean calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa para no asistir.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

150

PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado



151

que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

152

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman y adicionan los artículos 38, 79, 81, 87, 135, 137, 138, 140, 141, 148, 150, 151, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175bis, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 207, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 220bis, 220bis1, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228bis, 229, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 265bis, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 275 bis, 275 bis1, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 300, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349bis, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 406 del **Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 38. De la multa.

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, la cual se aplicará en beneficio del Tribunal Superior de Justicia para integrar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que se fijará por **Unidad de Medida y Actualización** y podrá ser de dieciocho a cinco mil cuarenta veces el importe de esta.

Para la imposición de la multa y para determinar la prisión aplicable, si es el caso, se atenderá a la **Unidad de Medida y Actualización** tratándose de delito continuado, se atenderá al monto de la **Unidad de Medida y Actualización** en el momento comisivo de la última conducta; si es permanente, al del momento en que cesó su comisión.

Artículo 79. Punibilidad del delito culposo.

En los casos de delitos culposos, se impondrán de tres meses a cinco años de prisión, multa de dieciocho hasta trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión hasta por cinco años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio, salvo lo que disponen las fracciones I y II de este artículo. En el caso de homicidio culposo la pena será de dos a cinco años de prisión y multa de noventa y tres a trescientos sesenta días de salario.

En relación a estos delitos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos de transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, con autorización, permiso o licencia concedida por las autoridades competentes o sin cualquiera de ellas, se cause homicidio a dos o más personas, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión, multa de doscientos ochenta y ocho hasta quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de igual naturaleza;

II. Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos se cometa homicidio y el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho hasta setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

Artículo 81. Cuando por culpa se ocasione únicamente el delito de daños que no sea mayor del equivalente a doscientos cincuenta veces **la Unidad de Medida y Actualización**, se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de éste.

Artículo 87. Sustitución de la prisión. Cuando se trate de infractores primarios, que hayan observado buena conducta con anterioridad al delito, tengan modo honesto de vivir y no se hayan sustraído a la acción judicial durante el procedimiento, la pena de prisión cuya duración no exceda de dos años, podrá ser conmutada por el Juez de Control o el Tribunal de Juicio Oral por veinte a doscientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**. En caso de insolvencia se sustituirá por trabajo en favor de la comunidad.

...

I a la II...

...

Artículo 115. Efectos y características de la prescripción.

....

Los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, tráfico de influencias, cohecho en los términos de la fracción II del artículo 338, peculado cuando la cuantía exceda de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización** de conformidad con el artículo 339, concusión en los términos de la fracción II del artículo 340, homicidio calificado, tortura y enriquecimiento ilícito en los términos de la fracción II del artículo 322, son imprescriptibles.



Artículo 135. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinte años de prisión y multa de ochocientos sesenta a mil cuatrocientos cuarenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 137. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión y multa de mil cuatrocientos cuarenta a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Cuando el homicidio tenga características propias de feminicidio se impondrá de veinte a sesenta años de prisión y de mil quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización** de multa. En el caso de feminicidio, si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 138. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y multa de mil ochocientos a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple intencional. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 147 se impondrán de treinta a sesenta años de prisión y multa de dos mil ciento sesenta a cuatro mil seiscientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 140.

- I. De tres a seis meses de prisión o multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización** o ambas penas, si las lesiones tardan en sanar hasta quince días;
- II. De seis meses a dos años de prisión y multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta;
- III. De dos a tres años seis meses de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si tardan en sanar más de sesenta días;
- IV. De cuatro a seis años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando pongan en peligro la vida;
- V. De dos a ocho años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando dejen cicatriz perpetua y notable en la cara o en un pabellón auricular;
- VI. De tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro; y,
- VII. De tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible.

Artículo 141. Se impondrá, sin perjuicio de las penas señaladas en el artículo anterior, de uno a dos años de prisión y multa de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando la lesión haya sido producida por disparo de arma de fuego o cualquier otro objeto o instrumento punzocortante o punzo penetrante.

Artículo 148. Comete el delito de aborto quien provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo y se impondrán las siguientes penas:

- I. De uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si se obra con el consentimiento de la mujer embarazada; y,
- II. De tres a ocho años de prisión y multa doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada.

Artículo 150. Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere.

...
I a la III...

...
...

Artículo 151. A quien ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el suicidio se consuma. Si el sujeto activo prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión.

A quien induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 158. Al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal



155

privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de setecientos veinte a dos mil ciento sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

...
...

Artículo 159. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la guarda o custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...
...

Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo por móviles piadosos y para incorporarlo a su núcleo familiar otorgándole los beneficios propios de tal incorporación, se le impondrá una pena de nueve meses a tres años tres meses de prisión y multa de cincuenta y cuatro a doscientos treinta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...
...

Artículo 161. Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio.

...

Artículo 162. A quien sin tener el carácter de ascendiente, descendiente, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado o de tutela de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior los sustraiga de su custodia legítima o su guarda, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 163.- Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce años de edad, se le aplicará de diez a cincuenta años de prisión y multa de setecientos veinte a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 164. Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores o traficar con sus órganos, las penas serán de quince a cincuenta años de prisión y multa de mil ochenta a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en el caso de que la víctima sea un menor de doce años las penas serán de veinticinco a cincuenta años de prisión y multa de mil ochocientos a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 167. A quien prive a otro de su libertad personal, con el propósito de realizar un acto sexual, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, el autor del delito restituye la libertad a la víctima, sin haber practicado el acto sexual, la pena será de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 168. Se impondrá de cuatro a quince años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que sin derecho, por cualquier medio, obligue a otro a hacer algo, con ánimo de lucro para sí o para otro, o causando un perjuicio patrimonial o moral, en contra de una persona o personas.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando en la comisión del delito:

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Artículo 169.- Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de la violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin y



cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le impondrán prisión de dos a seis años y multa de ciento cuarenta a cuatrocientos treinta dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el delito lo realizan dos o más personas.

La pena será de diez a treinta años de prisión y multa de setecientos veinte a dos mil ciento sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo, ya sea de transporte público o particular. Si los sujetos activos atacaren una población se aplicarán de quince a veinte de prisión y multa de mil ochenta a mil cuatrocientos cuarenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los que dirijan la ejecución de la conducta típica y de veinte a treinta años de prisión y multa de mil cuatrocientos cuarenta a dos mil ciento sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** a los demás.

Artículo 170. - Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada.

Cuando se hiciere uso de la violencia o se cometa por dos o más personas, la pena será de cuatro a seis años y multa de doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 171. - Se aplicará de seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien sin justa causa y con perjuicio de otro, revele algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada, que conoció con motivo de su función o ejercicio profesional o de su relación con la víctima o sus familiares.

...

Artículo 172.- Se aplicará de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien sin consentimiento de otro y para conocer algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada:

I a la III...

Artículo 173.- Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que exija para sí o para otro cualquier beneficio o la ejecución u omisión de algún acto determinado bajo la amenaza de divulgar algún hecho cierto o falso que afecte el honor, la tranquilidad familiar, negocios o patrimonio del amenazado o de alguien íntimamente ligado a éste.

...

Artículo 174.- Se aplicará de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I a la II...

Artículo 175 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 176. - A quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de quinientos setenta y seis a mil ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

...

...

Artículo 177. - Se aplicarán de diez a quince años de prisión y multa de setecientos veinte a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien:

I a la II...

...

Artículo 178.- Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Si se hiciera uso de violencia, la pena será de tres a siete años de prisión y multa de doscientos dieciséis a trescientos sesenta días **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 179. - Al que ejecute un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, en una persona menor de doce años o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por



157

cualquier causa no pueda resistirla o la obligue a ejecutarla, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 181 - Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que tenga cópula con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio del engaño.

Artículo 182.- A quien acose o asedie en forma reiterada a una persona con fines sexuales, a pesar de su oposición manifiesta y amenace con causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 183.- A quien disponga de óvulos o espermatozoides para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de doscientos dieciséis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 184. -A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 185. -Se impondrá de cuatro a siete años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos cuatro, **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere utilizado para ello un óvulo o espermatozoides de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente o del donante o con el consentimiento de menor de edad o de incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si del delito resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ochocientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 188. - Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, suspensión e inhabilitación por igual término al de la pena de prisión impuesta para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los que:

I a la III...

Artículo 189. - Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por cualquier medio transmisible, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos dieciséis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, sin perjuicio de que la autoridad judicial determine su cuidado o vigilancia en un establecimiento adecuado hasta que cese el periodo infectante. En caso de que se trate de una enfermedad incurable, se le impondrá una pena de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 190.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización** y se le privará de la patria potestad o de la tutela, al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla. Si el sujeto activo fuere ascendiente o tutor de la víctima, se le privará del derecho de heredar respecto a la persona abandonada.

Artículo 191.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que omita auxiliar a una persona que por cualquier circunstancia, estuviese amenazada de un peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo alguno o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo no diere inmediato aviso a la autoridad.

Artículo 192.- A quien después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 193.- Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

...

Artículo

196.-

...:

I. De seis meses a dos años de prisión o multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo robado no exceda de veinticinco veces **Unidad de Medida y Actualización**.

158

II. De uno a cuatro años de prisión o multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo robado exceda de veinticinco pero no de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

III. De dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

IV. De cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo robado exceda de seiscientos, pero no de tres mil quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,

V. De seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo robado exceda de tres mil quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 197. - Las penas señaladas en el artículo anterior, se aumentarán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el robo se realiza en las circunstancias siguientes:

I a la VIII...

IX. Respecto de objetos que se encuentran en el interior de los vehículos automotores cuando el valor de lo robado exceda de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,

X.-...

Artículo 198. - Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, además de las penas que le correspondan conforme al artículo 196 de este código, en los siguientes casos:

I a la X...

Artículo 199. - Se sancionará con pena de cinco a doce años de prisión y multa de trescientos sesenta a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que después de la ejecución del robo de un vehículo y sin haber participado en éste, posea, enajene, trafique, reciba o comercialice, los instrumentos, objetos, refacciones o material de la unidad, en todo o en partes y no posea documentos y/o otros elementos de convicción que demuestren su legal posesión y procedencia.

...

Artículo 200. - Si el apoderamiento se cometió con ánimo de uso, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, siempre que la restituya espontáneamente antes de que la autoridad tome conocimiento del delito. Como reparación del daño, pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada, conforme a los valores del mercado

Artículo 203. - ...:

I. Si fuera una cabeza, se aplicará prisión de dos a cinco años y multa de ciento cuarenta y cuatro a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

II. Si excediera de una pero no de diez cabezas, se aplicará prisión de cuatro a nueve años y multa de doscientos ochenta y ocho a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,

III. Cuando el número de cabezas fuera mayor de diez, se aplicará prisión de seis a quince años y multa de cuatrocientos treinta y dos a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 204. - ...:

I. Si fueran de una a diez cabezas, se aplicará prisión de uno a cinco años y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,

II. Si excedieran de diez cabezas, se aplicará prisión de tres a ocho años y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 206.-...:

I. Multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro días de salario, cuando el valor de los daños no exceda de cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

II. Prisión de seis meses a tres años y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización** cuando el valor de los daños exceda de cincuenta pero no de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

III. Prisión de tres a seis años y multa de doscientos dieciséis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de los daños exceda de quinientas pero no de cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,

IV. Prisión de seis a doce años y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el valor de los daños excede de cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada, al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza

159

no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 207.- Se impondrá prisión de cinco a diez años y multa de trescientos sesenta a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el peligro, daño, destrucción o deterioro, se causare por medio de inundación, incendio, bombas o explosivos.
Se impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de trescientos sesenta a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que ponga en peligro o cause daños a bienes de valor científico, artístico, cultural, de servicio público, bosques, selvas, pastos o cultivos de cualquier género.

Artículo 212.-

I. De seis meses a dos años de prisión o multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo defraudado no exceda de quince veces el salario mínimo;
II. De uno a cuatro años de prisión o multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo defraudado exceda de quince, pero no de noventa veces **la Unidad de Medida y Actualización**;
III. De dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo defraudado exceda de noventa, pero no de seiscientos veces **la Unidad de Medida y Actualización**;
IV. De cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis , **veces la Unidad de Medida y Actualización** cuando el valor de lo defraudado exceda de seiscientos, pero no de tres mil quinientas veces **la Unidad de Medida y Actualización**; y,
V. De seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta dos a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil quinientas veces **la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 214.-

I. Prisión de tres meses a un año y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el monto de lo dispuesto no exceda de doscientas veces **la Unidad de Medida y Actualización**;
II. Prisión de uno a seis años y multa de setenta y dos a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el monto excede de doscientos pero no de dos mil veces **la Unidad de Medida y Actualización**; y,
III. Prisión de seis a doce años y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el monto es mayor de dos mil veces **la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 216.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien disponga indebidamente o se niegue sin justificación a entregar un vehículo recibido en depósito de autoridad competente o bien éste se encuentre relacionado con delitos por tránsito de vehículos, habiendo sido requerido por autoridad que conozca o siga conociendo del caso

Artículo 217.- Al que obtenga de otra persona ventajas usurarias por medio de contratos o convenios, en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado, se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de setenta y de dos a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 218.- Además de las penas anteriores, la prisión se aumentará de seis meses a cuatro años y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho días **veces la Unidad de Medida y Actualización**:
I a la III...

...

Artículo 219.- Al que con ánimo de lucro, después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste, venda, pignore, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél o al que ayude a otro para los mismos fines, y no justifique su legal posesión y/o procedencias se le aplicará de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.
Cuando el sujeto que realice alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior sea el propietario, poseedor administrador o empleado de cualquier clase de negociación o establecimiento dedicado a la compra, venta, compraventa, empeño o intercambio de mercancía usada o nueva, se le aplicará una pena de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos sesenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 220. - Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien por medio de la violencia sobre las personas o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño:

I **a** **la** **III.-...**

Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión y a quienes instiguen a la ocupación de la cosa, cuando el despojo se realice por dos o más personas. Si al realizarse el despojo se cometen otros delitos, aún sin la participación física de los autores intelectuales, de quienes dirijan la invasión e instigadores, se considerará a éstos, imputados de los delitos cometidos.

Artículo 220 Bis.- A quien introduzca ganado bovino al Estado o zona de baja prevalencia y acreditada, o lo movilice con ánimo de comercialización sin cumplir con la normatividad aplicable, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de diez a noventa y tres **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Si la introducción se realiza con la intención de comercializarlo para exportación, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de noventa y tres a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 220 Bis 1.- A quien presente o pretenda documentar ganado bovino como nacido en una zona de baja prevalencia y acreditada en la Entidad, sin serlo, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de noventa y tres a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 221.- La cuantía del objeto o del producto del delito se estimará atendiendo a su valor comercial. Si el objeto o producto no fueren estimables en dinero, si por su naturaleza o por cualquier causa no fuere posible fijar su valor, se aplicará de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Tratándose del delito de robo se impondrán las penas previstas en los artículos 197 y 198 del presente Código cuando se actualicen las modalidades respectivas.

Artículo 222.- Cuando se trate de objetos de arte, históricos o de un valor estimativo especial para la colectividad, se estará a lo señalado por peritos de la materia y se aplicará de cinco a quince años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Tratándose del delito de robo se impondrán las penas previstas en los artículos 197 y 198 del presente Código cuando se actualicen las modalidades respectivas.

Artículo 223.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que altere términos o linderos de poblados o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos.

Artículo 224.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que altere por cualquier medio las señales o marcas que delimiten el crecimiento de los centros de población fijados en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y por disposición de la autoridad.

Artículo 225.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que sin permiso y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca en un predio cercado con el ánimo de obtener un lucro indebido, causar un daño y/o un perjuicio.

Artículo 226.- Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y multa de treinta y seis a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quienes compren o vendan o de cualquier forma transfieran o adquieran ilegalmente la tenencia de bienes sujetos a régimen ejidal o comunal, con propósito de lucro o para obtener un beneficio para sí o para otros, salvo las excepciones que se contemplan en la legislación agraria.

Artículo 227.- A quien por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio del Estado, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir, evitar localizar el destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 228.- Se sancionará con pena de prisión de diez a veinte años y multa de setecientos veinte a mil cuatrocientos cuarenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y baja de la corporación o institución que corresponda, al elemento que:

I a la XII...

...

Artículo 228 bis.- Al que con objeto de planear o ejecutar un delito, u obstruir la función de seguridad pública, realice actos tendientes a obtener o transmitir mediante cualquier medio, información sobre las actividades propias de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, y de ejecución de las penas y medidas de seguridad, de cualquier ámbito, o sobre cualquier servidor público, funcionario o trabajador, se le impondrá de cuatro a veinte años de prisión y multa de hasta quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Además de lo anterior, cuando el sujeto activo sea miembro, funcionario, trabajador o servidor público, de cualquiera de las instituciones de seguridad pública del Municipio o del Estado, de procuración de justicia y

161

de ejecución de las penas estatal, o haya pertenecido a cualquiera de éstas, o sea agente o trabajador de seguridad privada que realice actividades de custodia o vigilancia hacia servidores públicos, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y multa de hasta ochocientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 229.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien de manera permanente forme parte de una asociación o banda de tres o más personas destinada a delinquir.

Artículo 232.- A quien se atribuya el carácter de profesionista u ostente algún posgrado o especialidad, sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello y ofrezca o desempeñe sus servicios bajo ese carácter, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 233.- ...

I. Además de las penas fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos se les impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, suspensión de un mes a un año en el ejercicio de su profesión o especialidad con cuya actividad lo hubieren ocasionado, e inhabilitación; y,
II.-...

Artículo 234.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión para ejercer la profesión de un mes a un año, al médico en ejercicio que:

I a la II...

Artículo 235.- Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente o no cumpla con las obligaciones que le impone el Código Procesal Penal del Estado de Durango, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 236.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión para ejercer la profesión de uno a tres años, al profesional de la medicina que:

I a la IV...

Artículo 237.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión de un mes a dos años para ejercer la profesión a los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica que:

I a la IV...

...

Artículo 238.- Al médico, enfermero que prescriba o suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión para ejercer la profesión u oficio por un año.

Artículo 239.- A los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente señalada por otra que ponga en peligro la salud o cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 240.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que le haya sido confiada o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Se impondrá de dos a siete años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización** y la suspensión del derecho de ejercer la profesión, la actividad técnica o desempeñar el cargo de dos años, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste sus servicios profesionales o técnicos o por servidor público

Artículo 241.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que sin derecho impida de cualquier forma el aprovechamiento de bienes públicos de uso común y no retirare el estorbo a pesar del requerimiento que le haga la autoridad competente.

Se impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si llegare a privar del uso de los bienes.

Artículo 242.- Se aplicará de uno a cuatro años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización** y el decomiso de los productos a que se refiere este artículo:
I a la II...

Artículo 244.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que realice, encubra o favorezca la venta o distribución de bebidas con contenido alcohólico, en las formas a que se refiere los artículos anteriores de este código.

Artículo 247.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que por cualquier medio altere o destruya alguna vía de comunicación o transporte público, que no sean de jurisdicción federal, modifique o inutilice las señales correspondientes interrumpiendo o dificultando los servicios

Artículo 248.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **la Unidad de Medida y Actualización**, al que dolosamente ponga en movimiento un medio o vehículo de transporte, provocando un desplazamiento sin control, si no resultare daño alguno; si se causare daño, se impondrá además la pena correspondiente por el delito que resulte.

Artículo 249.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o transporte.

Artículo 250.- Se impondrá de quince a treinta años de prisión y multa de mil ochenta a dos mil ciento sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que para la ejecución de los hechos de que hablan los respectivos artículos anteriores, se valga de explosivos.

Artículo 251.- Se impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que dolosamente abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él.

...

Artículo 253.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al empleado de un telégrafo, teléfono o estación inalámbrica que perteneciere al Estado, que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto o de comunicar al destinatario, el que recibiere de otra oficina.

Artículo 254.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de prisión y multa de doscientos dieciséis a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 255.-

I a la VIII. . . .

Al responsable del delito contra la seguridad de la comunidad, se le impondrán de seis a quince años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 256.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien:

I a la II. . .

Si la conducta que en uno u otro caso se realice es con el ánimo de alterar, dañar, borrar, destruir o de cualquier otra manera provocar la pérdida de datos o información contenidos en el sistema, la sanción será de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 258.- Se aplicará prisión de seis meses a seis años y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que:

I a la II...

Si la conducta que en uno u otro caso se realiza, tiene la intención dolosa de alterar, dañar, borrar, destruir, o de cualquier otra forma provocar la pérdida de los datos o información contenidos en el sistema informático de la entidad pública, la sanción será de uno a ocho años de prisión y multa **de cincuenta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 261.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a setecientos veinte treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I a la III. . .

163

Artículo 262.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que no exhiba la documentación correspondiente de una explotación forestal o del transporte de sus productos o no justifique la legal adquisición de esos productos o presente una documentación irregular al personal oficial del Estado que la requiera.

...

Artículo 263.- Se impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los comerciantes o industriales que, por cualquier medio, alteren en su cantidad o calidad las mercancías o productos de venta al público o les atribuyan cualidades que no tengan.

Artículo 264.- Se impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta y ocho treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que dolosamente venda, adquiera, posea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas, implementos u otros materiales destinados a la producción agropecuaria, que se hayan entregado a los productores por alguna entidad o dependencia pública a precio subsidiado.

Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el que entregue los insumos o materiales referidos fuere el productor que los recibió de las instituciones oficiales. Se harán acreedores a la misma sanción, los funcionarios o empleados de alguna entidad o dependencia pública estatal que entreguen estos insumos a quienes no tengan derecho a recibirlos.

Artículo 265.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I a la II. . .

...

Artículo 265 Bis.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a toda persona que con ánimo de acaparamiento, almacene artículos de consumo necesario, por un período mayor de tres meses sin efectuar operaciones de venta.

...

I a la II-. . .

...

Quien realice operaciones de venta a precios que produzcan lucro inmoderado, mercancías de las señaladas en el párrafo anterior, será castigado de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Cuando los productores, distribuidores, comisionistas, comerciantes y en general cualquiera persona, con el fin de obtener lucro inmoderado, concierten actos tendientes a elevar en forma exagerada los precios de las mercancías de consumo necesario, serán sancionados de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 266.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al patrón que habitualmente y violando la Ley Federal del Trabajo:

I a la VIII. . .

Artículo 267.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al patrón que con el solo propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo, impute indebidamente a uno o más de sus trabajadores, la comisión de un delito o falta.

Artículo 268.- Se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que deteriore áreas naturales protegidas o el ecosistema del suelo de conservación.

...

Artículo 269.- Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien trafique con una o más especies o subespecies silvestres de flora o fauna terrestre o acuática en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial.

Artículo 270.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que:

I a la VIII. . .

Artículo 271.- Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que:

I a la II. . .



164

Artículo 272.- Se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los empresarios o industriales o sus administradores, que a sabiendas:

I a la III. . .

...

Artículo 273.- Se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de doscientos dieciséis a seiscientos cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como las sanciones administrativas previstas en la legislación ambiental, a quien realice o permita, mediante acción u omisión, la ocupación o invasión de:

I a la V. . .

...

Artículo 274.- Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de doscientos dieciséis a seiscientos cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien haga un uso de suelo distinto al permitido u obtenga un beneficio económico derivado de éstas conductas.

Artículo 275.- Se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, a quien:

I a la IV. . .

...

Artículo 275 Bis.- Se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que proteja o refrende una autorización o concesión proveniente de cualquier autoridad ambiental del Estado de Durango o sus Municipios, a partir de información falsa o de uno o más documentos falsos o alterados.

...

Artículo 275 bis 1.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los prestadores y laboratorios de servicios ambientales, que proporcionen documentos o información falsa u omitan datos con el objeto de que las autoridades ambientales otorguen o avalen cualquier tipo de permiso, autorización o permiso.

...

Artículo 276.- Al que por cualquier medio procure, facilite o induzca a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales, con el objeto de videografarla, fotografarla o exhibirla a través de cualquier medio se le impondrán de seis a catorce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a mil ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales gráficos.

...

...

Artículo 277.- A quien por sí o a través de terceros dirija cualquier tipo de asociación delictuosa, con el fin de que se realicen las conductas previstas en este capítulo, se le impondrán prisión de ocho a dieciséis años y multa de quinientos setenta y seis a mil ciento cincuenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de materiales gráficos.

Artículo 279.- Al que por cualquier medio, procure, propicie, posibilite, promueva induzca o facilite el que una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, realice actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, bebidas embriagantes, consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo, se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz o éstos incurran en la comisión de algún delito, las penas se aumentarán de dos a cinco años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, el menor o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, fármaco dependencia, se dedique a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de cinco a quince años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis días **veces la Unidad de Medida y Actualización**.



165

Artículo 280.- A quien permita directa o indirectamente el acceso de una persona menor de edad a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Quien por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 281.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien:

I a la II...

...

Artículo 283.- Al que promueva, publicite, facilite o gestione, por cualquier medio, viajes al territorio del Estado de Durango o al exterior de éste, con el propósito de que la persona que viaja tenga relaciones sexuales con menores de edad o con quien no tenga capacidad de comprender o resistir el hecho, se le impondrá una pena de cinco a catorce años de prisión y multa de trescientos sesenta a mil ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 284.- Se sancionará de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que:

I a la III...

...

Artículo 285.- Se impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país.

Artículo 287.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I a la III...

Artículo 288.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste o de algún vicio, si el delito no se ejecutare.

...

Artículo 291.- Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que con el fin de alterar el estado civil incurra en alguna de las conductas siguientes:

I a la IX...

...

Artículo 293.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que contraiga o autorice matrimonio con conocimiento de la existencia de un impedimento o sin que hayan transcurrido los términos suspensivos para contraer matrimonio que señala la legislación civil.

Artículo 294.- Se impondrá de tres meses a cuatro años de prisión y multa de dieciocho a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que estando unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio, con las formalidades legales.

...

Artículo 297.- Al que abandone a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, aun cuando cuente con el apoyo de familiares o terceros, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a



166

cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.

...

...

...

Artículo 298.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

....

Artículo 300.- A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización** y perderá el derecho de pensión alimenticia y en su caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Asimismo se le sujetará a tratamiento especializado psicológico, psiquiátrico o reeducativo según corresponda, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito.

...

...

Artículo 302.- A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí se les impondrá prisión o tratamiento en libertad de uno a seis años y multa de setenta y dos a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 306.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, precedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud:

I a la IV...

...

Artículo 307.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que oculte, destruya, sepulse o mande sepultar un cadáver, un feto o restos humanos y al que exhume un cadáver, sin los requisitos que exige la ley.

...

Artículo 308.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I

a

la

III.-...

Si los actos de necrofilia consisten en la realización del coito se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 309.- Al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror, en la población o en grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a éste para que tome una determinación, se le impondrá de tres a treinta años de prisión y multa de doscientos dieciséis a dos mil ciento sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión de derechos políticos hasta por ocho años.

Al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y su identidad no lo haga saber a las autoridades, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de setenta y dos a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 310.- Se impondrá de dos a quince años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años al que con el fin de trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado o para alterar la



167

capacidad de éste para asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca:

I a la IV ...

Al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y su identidad no lo haga saber a las autoridades, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 311.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización** y la suspensión o la privación de sus derechos políticos hasta por tres años, a los que no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, traten de:

I a la III.- ...

Se impondrá de seis a doce años de prisión y multa de treinta y seis a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los autores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros, para cometer el delito de rebelión.

Artículo 312.- Se impondrá de dos a quince años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno bajo la protección y garantía de éste, proporcione voluntariamente a los rebeldes, hombres para el servicio de las armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de comunicación o impida que las fuerzas de seguridad pública del gobierno reciban esos auxilios.

La prisión será de dos a cinco años y multa de ciento cuarenta y cuatro a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si residiere en territorio ocupado por los rebeldes. Se impondrá de dos a quince años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los servidores públicos del Estado y municipios, de organismos auxiliares estatales o municipales y de fideicomisos públicos, que teniendo por razón de su cargo documentos de interés estratégico, los proporcionen a los rebeldes

Artículo 313.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de setenta y dos a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**:
I a la IV...

Artículo 314.- Se impondrá de quince a cincuenta años de prisión y multa de mil ochenta a tres mil seiscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los servidores públicos, así como a los rebeldes, que después del combate, priven de la vida a los prisioneros.

Artículo 316.- Se impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de treinta y seis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización** y la suspensión o la privación de sus derechos políticos hasta por dos años, a los que reunidos tumultuariamente, sin uso de las armas, impidan o ataquen en forma violenta a la autoridad o ataquen para impedir el libre ejercicio de sus funciones, con algunos de los propósitos a que se refiere el artículo 311 de este código.

Se impondrá de dos a doce años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los autores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer este delito.

Artículo 317.- Siempre que dos o más personas resuelvan cometer alguno de los delitos de que tratan los capítulos tercero, cuarto y sexto de este subtítulo y acuerden los medios para producirlos, se les impondrá de uno a siete años de prisión y multa de setenta y dos a quinientos cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización** y suspensión de sus derechos políticos hasta por dos años.

Artículo 318.- Se impondrá de seis meses a siete años de prisión y multa de treinta y seis a quinientos cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización** y la suspensión o la privación de sus derechos políticos hasta por dos años, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación, con empleo de violencia.

Se impondrá de uno a diez años de prisión y multa de setenta y dos a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los autores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer este delito.

Artículo 320.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien:

Artículo 321.- Se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a cientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

I a la II...

Artículo 322.- ...

...

I. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** vigente en el momento en que se comete el delito, se impondrá de



169

II.-...

...

Cuando el monto de las operaciones no exceda del equivalente de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Cuando el monto de las operaciones exceda del equivalente a noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Cuando no sea posible cuantificar el monto de las operaciones, se aplicará una pena de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 336.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que:
I a la II...

Artículo 337.- El servidor público que por sí o por interpósita persona, influyere en otro servidor público, valiéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro servidor público, para tramitar un negocio o conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero o que este no sea cuantificable, se le impondrán, de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.
Si la conducta produce un beneficio económico que exceda de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 338.-...

I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** en el momento de cometerse el delito o no sea valuable, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización** o,

II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 339.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que:

I a la II.-...

Cuando el monto o valor del objeto del delito exceda de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a setecientos veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**.
Cuando no sea posible valorar el monto del objeto se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 340.- ...

...

I. De tres meses a tres años de prisión o multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización** o ambas cuando el valor de lo exigido no exceda de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización** o no sea valuable; y,
II. Si el valor de lo exigido o la cantidad exceden de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 344.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien en nombre de un servidor público solicite dinero, valores, servicios o cualquier otra dádiva, en los casos a que se refieren los delitos de cohecho, concusión y tráfico de influencia.

...

Artículo 345.- Al que sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.
Cuando el sujeto activo se atribuya en vías de hecho la condición de miembro de una corporación

policíaca o militar sin serlo, la punibilidad será de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 346.- Al particular que en nombre de un servidor público solicite dinero, valores, servicios o cualquier otra dádiva o promueva una conducta ilícita de un servidor público o se preste para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 347.-....:

I. De tres meses a tres años de prisión o multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario o ambas penas, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva o promesa, no excedan del equivalente de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** donde se cometa el delito o no sean cuantificables;

y,
II. De tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva o promesa exceda de noventa **veces la Unidad de Medida y Actualización** donde se cometa el delito.

....

Artículo 348.- Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, depósito, administración de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al erario público o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 349 Bis.- A quién con o sin ánimo de lucro constituya, fomento o administre centros donde se presten servicios educativos, que no cuenten con la debida autorización expedida por autoridad competente o que omita cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 350.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad.

Artículo 351.- Se impondrá de veinte a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización** de multa, al que debiendo ser examinado por la autoridad, sin que le aprovechen las excepciones constitucionales ni las establecidas por este código o el Código Procesal Penal, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar.

Artículo 352.- Se le impondrá de un año a dos años de prisión y multa de setenta y dos a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que por medio de la violencia se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales.

Artículo 353.- Las penas serán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento de una sentencia.

Artículo 355.- Al que con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo público, programa o cualquier otro tipo de beneficios colectivos ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de dieciocho a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta y seis a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena será de uno a cuatro años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, sin perjuicio de las penas aplicables al delito que resulte cometido. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los autores intelectuales, a quiénes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros, para cometer el delito de oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos.

Artículo 356.- Al que quebrante, los sellos puestos por orden de la autoridad competente, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 357.- Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

171

Artículo 358.- Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho, que deba ejercitar, empleare violencia, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 359.- Se impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien coaccione a la autoridad por medio de la violencia, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no esté en sus atribuciones.

Artículo 360.- quién posea, conduzca o preste servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado, se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de ochocientos ochenta y dos a mil doscientos treinta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, además de suspensión de la licencia de manejo de automovilista y/o de chofer de servicio público hasta por un término igual al de la pena de prisión impuesta, según corresponda

...

...

Quien conduzca un vehículo que preste servicio público de transporte con una sola placa, deberá acreditar que el número de la misma coincide con el del engomado correspondiente. Si no coinciden, no cuenta con el engomado o circula sin ambas placas, se aplicará la pena prevista en el párrafo primero, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de ochocientos ochenta y dos a mil doscientos treinta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 362.- Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena que corresponda por el delito cometido, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 363.-...

I a la XVII.-...

Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, destitución e inhabilitación de tres meses a tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, a los imputados de los delitos previstos en las fracciones I a la VII de este artículo. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, destitución e inhabilitación de seis meses a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, a los imputados de los delitos previstos en las fracciones VIII a la XVII de este artículo.

Artículo 364.- Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que:

I a la VIII...

Artículo 365.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de:

I a la IV...

...

Artículo 367.- El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 369.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que:

I a la VII...

Artículo 370.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al servidor público que por sí o por interpósita persona durante el desarrollo de un proceso utilice la violencia contra una persona, para evitar que ésta o un tercero aporte pruebas relativas a la comisión de un delito.



Artículo 371.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien habiendo prestado atención médica a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente:

I a la V...

Artículo 374.- Se impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al profesional en medicina, técnico o práctico que con motivo de su profesión o actividad, tenga conocimiento del estado de abandono de un recién nacido, persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender los hechos o adulto mayor y omita dar aviso inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Estatal o a la autoridad que exista en el lugar, quedando bajo la responsabilidad de esta última el informar a la autoridad competente.

Artículo 375.- Se impondrán de tres meses a seis años de prisión y multa de dieciocho a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien por sí o por interpósita persona:

I a la IV...

Artículo 376.- A quien indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de aquélla, se le impondrán de tres meses a siete años de prisión y multa de dieciocho a quinientos cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 377.- A quien favorezca al mismo tiempo o en un sólo acto, la evasión de dos o más personas privadas legalmente de su libertad, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a ochocientos sesenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 379.- Si la reaprehensión del evadido se logra por gestiones del responsable de la evasión, la pena aplicable será de tres meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 380.- Al sujeto activo no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre de concierto con otro u otros presos y se evada alguno de ellos o ejerza violencia, en cuyo caso se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 381.-...

Se impondrán de seis meses a un año de prisión y multa de treinta y seis a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que favorezca el quebrantamiento de la pena o medida de seguridad. Si se trata de un servidor público que tenga a su cargo el cumplimiento de la pena o medida, la pena de prisión será de uno a tres años de prisión y multa de dieciocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como la privación del cargo o comisión y cualquier otro servicio público e inhabilitación para ocupar otro de igual naturaleza por tres años.

Artículo 382.- Se impondrán tres meses de prisión y multa de dieciocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**:

Artículo 384.- Se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, para obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

...

Artículo 385.- Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta.

Artículo 386.- ...

La pena será de tres a quince años de prisión y multa de doscientos dieciséis a mil ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, para el testigo que fuere examinado en juicio penal, cuando al sentenciado se le haya impuesto una pena mayor de tres años de prisión y el testimonio falso haya servido de base para la condena.

Artículo 387.- Si el sujeto activo se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su dictamen, antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, sólo se le impondrá de cinco a cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** de multa. Si no lo hiciere en dicha etapa, pero sí antes de dictarse sentencia en segunda instancia, se le impondrá pena de tres meses a un año de prisión. Pero si en la retractación faltare a la verdad, se le impondrá la pena que corresponda con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior.

173

Artículo 388.- Al que examinado como perito o interprete por la autoridad judicial o administrativa dolosamente falte a la verdad en su dictamen o traducción, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio, empleo, cargo o comisión públicos hasta por dos años.

Artículo 389.- Al que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 392.- Se impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de dieciocho a setenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**:
I a la III...

Artículo 393.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad judicial, simule en su contra la existencia de pruebas que hagan probable su responsabilidad, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 394.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como suspensión para ejercer la abogacía o profesión, hasta por dos años a quien:
I a la VIII...

Artículo 395.- Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste:
I a la VI...

Artículo 396.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, así como la suspensión del derecho de ejercicio de la profesión de un mes a un año al médico, cirujano, partero, enfermero o cualquier otro profesionista sanitario que omitiera denunciar a la autoridad correspondiente los delitos de que hubiere tenido conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión.

Artículo 397.- Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización** y destitución de su empleo, cargo o comisión, al servidor público a quien se le haya hecho ofrecimiento o promesa de dinero o de cualquier otra dádiva, con el propósito de realizar cohecho y que no lo haga del conocimiento del Ministerio Público.

Artículo 399.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos setenta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al que:
I a la II...

Artículo 400.- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos cuarenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**, impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien con el fin de obtener un beneficio o causar un daño:
I a la VII...
...

Artículo 401.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien con el fin de obtener un beneficio o causar un daño:
I a la II...
...

Artículo 402.- Al que elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos automotores o remolques, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.
...

Artículo 403.- Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientos sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización** y de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis **veces la Unidad de Medida y Actualización**, tratándose de documentos privados
...

La punibilidad será de dos a siete años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a quinientos cuatro **veces la Unidad de Medida y Actualización**, si el documento es una credencial o medio de identificación de los autorizados oficialmente para los miembros del Ministerio Público o las corporaciones policíacas.

Artículo 406.- Al que por cualquier medio de comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a un sistema de respuesta de llamada telefónica, de



174

emergencia o su equivalente, se le impondrá de tres a seis meses de prisión o multa dieciocho a treinta y seis **veces la Unidad de Medida y Actualización**. Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se altera del orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se impondrán de uno a cuatro años prisión y multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



175

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código Fiscal del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO



178

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 25 fracción IX, 53, 80 fracción I y II, 94 párrafo primero, 146, 209 último párrafo, 220 párrafo tercero y 225 párrafo tercero, toso del **Código Fiscal Municipal de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

....:

I a la VIII...

IX.- ...

a) a la d) .-...

e).- Emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio, que juzguen eficaces, para hacer cumplir sus determinaciones:

1).- La multa de 1 a 16 quince **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** que se duplicará en caso de reincidencia;

2).- ...; y

3).- ... ;

f) a la i) ...

...

X. a la XII...

Artículo 53.- Solamente por acuerdo expreso del Ayuntamiento podrá autorizarse la prórroga para el pago de los créditos fiscales municipales, equivalentes a diez **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades.

La prórroga o el plazo dentro del cual deben pagarse las parcialidades, no excederá de un año. Las prórrogas por el pago de créditos municipales menores de diez **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, serán autorizados por el C. Presidente Municipal o por el Tesorero Municipal, no pudiendo exceder de un año.

179

...

Artículo 80.- ...:

I.- De cuatro a seis **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** en que se cometa la infracción a las previstas en las fracciones I, II, III, IV y V;

II.- De dos a siete **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, vigente al momento en que se cometa la infracción a las previstas en las fracciones VI y VII siempre que no puedan precisarse el monto de la prestación fiscal omitida. De lo contrario la multa será hasta de tres tantos del importe de dicha prestación;

III. ...

Artículo 94.- ...

El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de 15 días a dos años si el monto de lo defraudado no excede de diez **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**. Cuando exceda de esta cantidad la pena será de uno a cinco años de prisión.

...

...

...

Artículo 146.- Si el valor de los bienes, excede de una cantidad equivalente a tres **veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** se publicará en el Periódico Oficial y en el de mayor circulación del lugar por dos veces con intervalo de siete días. A solicitud del deudor y a su costa, se podrá ordenar una publicación más amplia en los mismos plazos.

Artículo 209.-....:

I a la IV....

Mientras estén pendientes de resolución los demás incidentes a que se refiere este capítulo, el juicio continuará hasta que se cierre la instrucción. Si el incidente hecho valer es notoriamente frívolo e improcedente se impondrá a quien lo promueva una multa hasta el equivalente al **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** elevado a un trimestre.

Artículo 220.- ...

...

Si la autoridad no da cumplimiento a lo ordenado, se impondrá al funcionario responsable del incumplimiento una multa de uno a tres tantos del equivalente al **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, elevado al mes.

180

...

Artículo 225.- ...

...

En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización**, elevado al trimestre, a los funcionarios omisos.

....

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ



181

RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES EN EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA**

NEVAREZ del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo,

184

para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 10 párrafo segundo, 49 fracción III, 224 fracción III inciso a, del **Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

La inobservancia a esta disposición, dará como resultado el pago de una indemnización de cien a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** a la persona menor de edad que resulte afectada, sin perjuicio de lo que establezca la legislación penal de nuestro Estado.

...
...
...

Artículo 49.

- I.;
- II.;
- III. Multa de uno hasta cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y,
- IV.

Artículo 224. ...

-
- I.;
 - II.;
 - III.;
 - IV. Multa de uno hasta cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y
 - V.

....
...
...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



186

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA FRUTICULTURA PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Fomento y Protección a la Fruticultura para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado



que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio,

pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 14 y 15l de la **Ley de Fomento y Protección a la Fruticultura para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Con el fin de integrar el patrimonio de cada Comité Regional, según el punto primero del artículo anterior se establece un derecho anual de 0.95% **el valor de la Unidad de Medida y Actualización** por reja de manzana de mesa, y un 0.095% por reja de manzana para industrialización con cargo a los propietarios de las huertas. La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado habilitará a un integrante de este organismo para recabar este derecho, de conformidad con las facultades que le otorga la Ley Económico Coactiva del Estado de Durango. El pago del derecho deberá hacerse a la salida de la manzana de la región. Dicho pago es obligatorio para todos los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de los terrenos en producción, en el territorio de cada región de la Entidad



en que el Ejecutivo del Estado, en uso de la facultad que le concede el artículo 5 de esta Ley, organice el respectivo Comité Regional para el Fomento y Protección a la Fruticultura.

Artículo 15.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para que, a solicitud debidamente fundamentada del respectivo Comité, envíe al H. Congreso del Estado, Iniciativa de Decreto para que se incremente o se reduzca el importe del derecho 0.95% **el valor de la Unidad de Medida y Actualización**, por reja de manzana de mesa y 0.095% para fruta de uso industrial; en la inteligencia de que no se autorizará ninguna reducción, mientras tanto hubiere algún saldo pendiente de liquidar, de créditos o de cualquier tipo de pasivo, o bien mientras la región se encuentre afectada por alguna plaga o enfermedad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN



190

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS FORESTALES, FRUTÍCOLAS, Y PESCA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango,

nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mitad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo,



toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según

193

sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 53 fracción I de la **Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 53.-...

I. Multa de 15 a 125 **veces la Unidad de Medida y Actualización**

II. ...

...

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO



194

RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: TIENE LA PALABRA EL DIPUTADO
_____, HASTA POR 15 MINUTOS.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA,
PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

36o.-PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA
PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ
DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ
GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO
OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y
ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO



195

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Prevención y Asistencia para la Atención de las Adicciones del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.



Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

197

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 53 fracción II de la **Ley de Prevención y Asistencia para la Atención de las Adicciones del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 53.

- I.;
- II. Multa de 50 a 500 **veces la Unidad de Medida y Actualización:** y
- III.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto



198

que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.



La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras,

201

creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 25 y 26 de la **Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 25. Se sancionará con multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Artículo 26. Se sancionará con multa de mil hasta cuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento de los artículos 16 y 17 cuando se trate de los propietarios, poseedores, responsables y empleados de los espacios 100% libres de humo de tabaco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

**PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.**



203

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de la**

Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del

205

Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO



206

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 22 fracción II de la **Ley de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

I....

II. Multa de diez a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización;

III....

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN



207

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FAMILIA Y MENORES DE EDAD, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en

ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento



de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según

210

sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 111 fracciones II y III y 112 de la **Ley de Protección Y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 111.-...

- I. ...
- II. Multa de 50 a 10,000 **veces la Unidad de Medida y Actualización**;
- III. En el caso de conductas dolosas que se consideren como lesiones, tortura, vejación, mutilación que causen o puedan causar la muerte del Animal, la multa será de 100 a 10,000 **veces la Unidad de Medida y Actualización**;
- IV a la XII...

....

Artículo 112.- Para el caso de la sanción resarcitoria, la Autoridad competente podrá aplicar una cuota de recuperación de 50 a 10,000 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, según se determine en Resolución fundada y motivada, con independencia de la imposición de otras sanciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:



Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ESTATAL PARA LA

PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
PENAL, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA
PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II,

inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo

214

señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 28 y 29 de la **Ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, para quedar como sigue:

Artículo 28. . . .

Quien con la intención de poner en riesgo la seguridad de una persona protegida de conformidad con esta ley, divulgue o revele información sobre las medidas de protección otorgadas, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y multa de quinientos a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

. . .

Artículo 29. Desacato de la medida de protección ordenada.

A quien estando obligado a ejecutar una medida de protección conforme a esta ley y no le diere cabal cumplimiento en los términos y condiciones establecidos; será sancionada con prisión de dos a cuatro años y multa de quinientos a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

....

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.



215

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO



216

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

217

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

218

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 96 de la **Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 96....

Las autoridades tradicionales tendrán competencia para conocer y resolver controversias en materia civil de los asuntos cuya cuantía no exceda de 182 **veces la Unidad de Medida y Actualización** y en materia penal, siempre y cuando no se trate de delitos graves consignados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellos que se persiguen de oficio por la legislación penal aplicable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto



219

que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ELIA ESTRADA MACÍAS.

220

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE DURANGO Y DE LOS MUNICIPIOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Durango y de los Municipios** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario



221

mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

222

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:



223

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 52 párrafo segundo, 54, 55 fracción VI, 59 párrafo primero, 62, 76 fracción I, 77 fracción I y 87 párrafo segundo de la **Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Durango y de los Municipios**, para quedar como sigue:

ARTICULO 52

...

I a la VI...

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro, impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos e igualdad real de las oportunidades entre mujeres y hombres, o cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excede de cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, y de tres a diez años si excede de dicho límite.

...

Artículo 54.-

Las sanciones económicas establecidas en este Artículo se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en el **valor de la Unidad de Medida y Actualización**, conforme al siguiente procedimiento:

I.- La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el **valor de la Unidad de Medida y Actualización**; y

II.- El cociente se multiplicará por el **valor de la Unidad de Medida y Actualización** al pago de la sanción.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 55.- ...:

I.- a la V.- ...

VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto equivalente a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, y por la Secretaría, cuando sean superiores a esta cantidad.

...

...

Artículo 59.- El órgano de control interno de cada dependencia, organismo o entidad, será competente para imponer sanciones disciplinarias por acuerdo del superior jerárquico, excepto las económicas cuyo monto sea superior a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, las que están reservadas exclusivamente a la Secretaría que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la dependencia, organismo o entidad correspondiente.

....

Artículo 62.- La dependencia, organismo o entidad y la Secretaría en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, tomando en cuenta los antecedentes y circunstancias del infractor y que el daño causado por éste, no exceda de cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**. En los mismos términos procederán los ayuntamientos.

Artículo 76.- ...:

I.- Sanción económica de hasta veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**; y

II.-....

Artículo 77.- ...:

I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez **veces la Unidad de Medida y Actualización** o si la responsabilidad no causara daños al erario público. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; y

II.....

Artículo 87.- ...

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante el mismo no sea superior a diez **veces la Unidad de Medida y Actualización** en el momento de su recepción.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil



224

dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS.

225

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Durango y sus Municipios** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que



evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual. Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

227

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5, inciso i) y 11 de la **Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Durango y sus Municipios**, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

a) a la h) ...

i) UMA: Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 11. A quien promueva una reclamación notoriamente improcedente o que sea declarada infundada por haberse interpuesto sin motivo, se le impondrá una multa de veinte a cien **veces la UMA**. La multa será impuesta, sin trámite alguno, por la dependencia o entidad ante quien se haya presentado la reclamación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario

general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones del **Código Civil del Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que



230

evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras,

231

creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 56, 77, 108, 455, 782 y 1392 del **Código Civil del Estado de Durango** para quedar como sigue:

Artículo 56.- Las personas que estando obligadas a declarar el nacimiento, lo hagan fuera del término fijado serán castigados con una multa de una a seis veces la Unidad de Medida y Actualización que impondrá la Dirección General del Registro Civil en el Estado, en coordinación con la Autoridad Municipal del lugar donde se haya hecho la declaración extemporánea del nacimiento.

232

...

Artículo 77.- La omisión del Registro, en el caso del Artículo que precede, no quita los efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este Código; pero los responsables de la omisión incurrirán en una multa de una a seis veces la Unidad de Medida y Actualización que impondrá y hará efectiva el Juez ante quien se haga valer el reconocimiento.

Artículo 108.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la celebración de un matrimonio será castigado por la primera vez con una multa de seis veces la Unidad de Medida y Actualización y en caso de reincidencia, con la destitución de su cargo.

Artículo 455.- Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un incapacitado a quien deba nombrarse tutor, su executor testamentario y en caso de intestado los parientes y personas con quienes haya vivido están obligados a dar parte del fallecimiento al juez competente, dentro de ocho días, a fin de que se provea a la tutela, bajo la pena de una vez la Unidad de Medida y Actualización de multa.

Artículo 782.- El que se apodere de un bien vacante sin cumplir lo prevenido en este Capítulo, pagará una multa una vez la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que señale el respectivo Código.

Artículo 1392.- Se prohíbe a los notarios y cualquiera otras personas que hayan de redactar disposiciones de última voluntad, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la pena de seis veces la Unidad de Medida y Actualización de multa a los notarios y de la mitad a los que no lo fueren.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.



233

RÚBRICA
DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA
RÚBRICA
DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE SALUD PARA EL

ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXVII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Salud para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las

235

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador **promedio**.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas

236

leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 280, 281, 282, 283, 284, 285 y 286 de la **Ley de Salud del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 280.- Se sancionará con multa de hasta 50 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 162.

Artículo 281.- Se sancionará con multa equivalente de hasta cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 73, 74, 186 y 249 de esta Ley.

Artículo 282.- Se sancionará con multa equivalente de cinco hasta quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 184 de esta Ley.

Artículo 283.- Se sancionará con multa equivalente de diez hasta mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 116, 119, 144, 145, 146, 158, 185, 197, 200, 233 y 236 de esta Ley.

Artículo 284.- Se sancionará con multa equivalente de mil hasta cuatro mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación de las disposiciones de los artículos 131, 148, 154, 165, 250 y 275 de esta Ley.

Artículo 285.- Se sancionará con multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 88, 113, 258 y 272 de esta Ley.

Artículo 286.- Se sancionará con multa equivalente de diez mil hasta quince mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, la violación a las disposiciones contenidas en el artículo 132 y 177 bis de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS



237

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



238

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Seguridad Privada para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO



241

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 24 y 43 de la **Ley de Seguridad Privada del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 24.-...

I.- ...

II.- Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por un monto no menor a quinientos ni mayor a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** a juicio de la Secretaría en base a su capital contable, misma que deberá contener la siguiente leyenda:

"Para garantizar por un monto equivalente a **el valor de la Unidad de Medida y Actualización** las condiciones a que se sujetará en su caso la autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad privada otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, con vigencia de un año a partir de la fecha de autorización; la presente fianza no podrá cancelarse sin previa autorización de su beneficiaria, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado".

Artículo 43.-...

I.- ...

II.-Multa de un mil hasta cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

III. a V...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:



Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA
EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II,



244

inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y

245

que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 76 de la **Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 76.-...

- I. ...
- II. Multa de un mil hasta cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;
- III. a V.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.



A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

247

POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, LA CUAL SE
ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al

salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 63 párrafo cuarto, 138, 143, 148 fracción II y 150 de la **Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado**, para quedar como sigue:

Artículo 63.- ...

...
...
...

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de cien a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 138.-El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se cometan, ya sea por escrito o en cualquier otra forma. Las sanciones consistirán en amonestación o multa. Esta no excederá de **diez veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** tratándose de funcionarios.

Artículo 143.-El Tribunal, para hacer cumplir sus resoluciones podrá imponer multas hasta quince **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 148.-...

I.- ...

II.- Multa que no excederá una vez **la Unidad de Medida y Actualización** dos de cien pesos; y

III.-

Artículo 150.-Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida sanción especial, se castigarán con multa hasta quince **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al **monto** que tenga el salario mínimo **diario** general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo **Segundo** Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos **en esta ley**, así como en cualquier disposición jurídica que emane **de la misma**, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que



250

correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVENCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS

251

CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.



252

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

253

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 161 y 174 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 161...

I....

II. Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 174... :

I. ...

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 165 de esta Ley, y

III. Multa de ochocientos a mil quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 165 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

**PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.**



255

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Transportes para el Estado de Durango** con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediad o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual. Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

257

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 128 y 129 de la **Ley de Transportes para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 128.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, XVIII XX y XXI del artículo anterior, se aplicará multa de entre 5 a 100 **veces la Unidad de Medida y Actualización** y se suspenderá la prestación del servicio.

Por lo que respecta a las fracciones XIII y XVI del artículo anterior, se aplicará multa de 5 a 50 **veces la Unidad de Medida y Actualización** y se suspenderá la prestación del servicio.

Artículo 129.- Los supuestos previstos en las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII y XIX del artículo 127 de esta ley, serán sancionados con multas de 5 a 24 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

En relación a las sanciones establecidas en las fracciones VII y XV del artículo 127 de esta ley, se impondrá multa de 5 a 12 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

**PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.**



259

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTES, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Turismo del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado

260

que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

261

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO



262

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 76, 78 y 79 de la **Ley de Turismo del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 76 ...

En caso de reincidencia, serán sancionados con multa que podrá ir de quinientos hasta mil quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 78. Los prestadores que no se inscriban en el Registro Estatal de Turismo en los plazos señalados por esta Ley, serán sancionados con multa que podrá ir de quinientos hasta mil quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

....

En caso de que el prestador de servicios turísticos haga caso omiso del requerimiento, se hará acreedor a una multa que podrá ir de doscientos hasta quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

Artículo 79. Las infracciones a lo establecido en las fracciones I, III y X del artículo 65 de esta ley, se sancionarán con multa de hasta quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el **artículo Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA



263

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE TURISMO Y CINEMATOGRAFÍA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

264

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley de Víctimas del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las

265

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas

266

leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 63 de la **Ley de Víctimas del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 63 ...

...

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. El monto de gasto comprobable mínimo no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo **Quinto** Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.



267

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO

268

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL LIBRO Y BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley del Libro y Bibliotecas del Estado de Durango**, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.



Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

270

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 68 de la **Ley del Libro y Bibliotecas del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 68...

En el caso de los autores que tengan su domicilio o residencia en el Estado que incumplan con lo dispuesto en esta Ley, se les aplicará una multa de 15 a 30 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Para las obras de distribución gratuita, la multa será por una cantidad no menor de diez ni mayor de veinte **veces la Unidad de Medida y Actualización**. La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, será la dependencia estatal facultada para aplicar las sanciones correspondientes establecidas en esta Ley. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

271

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



272

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDITORIAL Y BIBLIOTECA, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley del Notariado para el Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual. Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 59 y 86 de la **Ley del Notariado para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 59.- ...

....:

1.- ...;

2.- Multa que no exceda de 685 veces la Unidad de Medida y Actualización.



275

3.- ...; y

4.-

....

Artículo 86.- ...:

I. Otorgar fianza equivalente a dos mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, ante la Secretaría de Finanzas y de Administración, misma que se actualizará en el mes de enero de cada año, atendiendo a la actualización que se haga de **la Unidad de Medida y Actualización**.

II. ...;

III. ...;

IV. ...; y

V.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA



276

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GANADERA PARA EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ,**

JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Ganadera para el Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento



de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO



LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 313, 313 bis 1, 315, 315 bis 1 y 322 de la **Ley Ganadera para el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 313. . . .

I. Al que no manifieste el ejercicio de la explotación pecuaria en los términos de esta ley, se hará acreedor a una multa equivalente a cien **veces de la Unidad de Medida y Actualización**;

II. . . .

III. A quien haciendo uso de una servidumbre de paso o vía pecuaria, permita el apareamiento con animales que no le pertenezcan se hará acreedor a una multa de cincuenta a trescientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

IV. Al que falsifique o altere el documento de transmisión de propiedad, guía de tránsito u orden de sacrificio, se hará acreedor a una multa equivalente de mil a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

V. A los dueños de saladeros, curtidurías, talabarterías, textiles y demás establecimientos dedicados a la industrialización de pieles, productos y subproductos pecuarios, que no presenten la documentación a que les obliga la ley, se harán acreedores a una multa equivalente de cien a doscientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

VI. Al que ordene o transporte cualquier especie doméstica productiva y no se detenga para su revisión correspondiente en los puntos de verificación e inspección estatal, se le impondrá una multa equivalente de cien a quinientas **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

VII. A quien se le detenga con animales orejanos sin la autorización correspondiente, y sin comprobar la legítima propiedad, se hará acreedor a una multa equivalente de dos mil a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

VIII. A quien se le detenga con animales mostrencos sin la autorización correspondiente, y sin comprobar la legítima propiedad, se hará acreedor a una multa equivalente de dos mil a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

IX. A quien transporte ganado, sus productos o subproductos sin ampararse con la guía de tránsito correspondiente, se hará acreedor a una multa equivalente de cincuenta a quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

X. Al propietario o usuario que no construya y no dé mantenimiento a los cercos de los terrenos utilizados como agostaderos, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta a doscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

XI. A la persona que movilice o lleve a cabo compraventa, ordene o realice el transporte de animales afectados por enfermedad infectocontagiosa, se le aplicará una multa equivalente de dos mil quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XII- A quien movilice o comercialice animales que hayan salido reactivos a las pruebas de tuberculina con motivo distinto al sacrificio, se le impondrá una multa equivalente de doscientos a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XIII. Al que abandone un animal o animales muertos por enfermedad infecto-contagiosa sin incinerarlos o enterrarlos, se le impondrá una multa equivalente de cien a doscientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XIV. Al propietario de ganado que se introduzca dos o más veces en predios ajenos causando daños, se le impondrá una sanción de entre cien y quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XV. A quien introduzca ganado al Estado proveniente de otras entidades federativas sin haber acreditado su legal procedencia se le aplicará una multa equivalente de cinco mil a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

280

XVI. A quien expida guías de tránsito para movilizar ganado de zonas de alta a baja prevalencia, se le impondrá de dos mil quinientos a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XVII. A quien introduzca ganado de otro Estado y lo movilice hacia otros estados haciéndolo pasar como originario del Estado de Durango, se le sancionará con multa equivalente de diez mil a veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XVIII. A quien una vez obtenido el visto bueno de la Secretaría para la movilización, altere la documentación o cualquier otra identificación o sustituya el ganado, se le impondrá multa de cinco mil a quince mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XIX. A quien incumpla con el último párrafo del artículo 149 de esta ley, se hará acreedor de una multa equivalente de cinco mil a quince mil **veces de la Unidad de Medida y Actualización**;

XX. (Derogado)

XXI. A quien transfiera autorizaciones para la internación de ganado, productos o subproductos, se le sancionará con multa equivalente de cien a quince mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XXII. Al propietario o encargado de ganado que provoque accidentes en las vías públicas estatales de comunicación, se le aplicará una multa equivalente de cinco mil a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XXIII. Al que participe en una acción encaminada a la adulteración mediante mezclas de otros productos o por cualquier otro medio, de la miel, y los productos de la colmena, jalea real, el polen y propóleos, se le aplicará una multa equivalente de cincuenta a cien **veces la Unidad de Medida y Actualización**, y

XXIV. Al que realice cualquier operación o contrato con el despojo de algún animal muerto por causa desconocida o enfermedad infecto-contagiosa, se hará acreedor de una multa equivalente de cien a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

XXV. A quien proporcione o asiente datos falsos en el formato único de factura que ampare la propiedad de los animales, en las guías de tránsito o las altere de cualquier forma se le aplicará una multa equivalente de dos mil quinientos a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XXVI. A quien ponga en riesgo el estatus sanitario alcanzado en la actividad ganadera en la entidad, se le impondrá una multa equivalente de diez mil a veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XXVII. A quien autorice o movilice ganado sin la documentación necesaria se le impondrá una multa equivalente de diez mil a veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

XXVIII. A quien evada las casetas de inspección ganadera se le impondrá multa equivalente de cuatrocientos a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 313 bis.- Se impondrá multa equivalente de cinco mil a veinte mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, al momento de cometerse la infracción se deberá herrar el ganado con las siglas C.N., independientemente de las penas que correspondan por los delitos en que hubieren incurrido, a quienes:

I a la VI...

Artículo 313 bis 1.-...

I. Multa de quinientos a dos mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** al momento de cometerse la infracción; y

II. ...

Artículo 315. ...

I. Multa de cien a mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cuando documento ganado que proceda de zonas que no le corresponda;

II. Multa de cien a dos mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** cuando se dedique directa o indirectamente a la compraventa de ganado, sus productos y/o subproductos pecuarios;

281

- III. Multa de cincuenta a quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización** cuando niegue el servicio de su competencia que le sea solicitado;
- IV. Multa de cien a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización**, cancele o convalide sin causa justificada la documentación que pruebe la legítima propiedad, sanidad y/o movilización de ganado sus productos y/o subproductos, y
- V. Multa de cien a diez mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** cuando proporcione los formatos de las guías de tránsito y sello oficial a personas ajenas al servicio de inspección.

A la autoridad que no expida el acta circunstanciada a que hace referencia el artículo 95 de esta ley, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...
...

Artículo 315 bis.- El técnico autorizado que aplique los identificadores de SINIIGA sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad de la materia, se le impondrá una sanción de mil a cinco mil **veces la Unidad de Medida y Actualización** y será inhabilitado en el desempeño de sus funciones por la Secretaría.

Artículo 322.

En los casos en que esta ley no especifique la sanción correspondiente, pero otorgue competencia a la Autoridad Municipal, ésta se limitará a aplicar multas de cincuenta a ciento cincuenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Secretaría o de otra autoridad municipal o estatal competente los hechos que pudieran constituir infracción o delito y cuya sanción no sea de su competencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA
DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA
RÚBRICA



282

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO
RÚBRICA
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
RÚBRICA
DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ
RÚBRICA
DIP. ELIA ESTRADA MACIAS
RÚBRICA
DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO
RÚBRICA
DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ
RÚBRICA
DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, PRESIDIDA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medid o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual. Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

285

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 52, 58, 87 y 148 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 52. Los juzgados auxiliares podrán ser especializados por materia o mixtos. En materia civil y mercantil conocerán de los asuntos cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

ARTÍCULO 58.....:

I. En materia civil, de los asuntos cuyo monto no exceda de setenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**;

II.....; y

III.....

ARTÍCULO 87.....:

I a la XXI...

XXII. Apercibir, amonestar e imponer multa hasta de ciento ochenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, de acuerdo con el Reglamento respectivo, a aquellas personas que falten al respeto a algún órgano o integrante del Poder Judicial del Estado, en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura;

XXIII a la XLIX...

ARTÍCULO 148.....

Quando la queja resulte infundada por haberse conducido con temeridad, mala fe, sin causa justificada o sin prueba, se podrá imponer a los promoventes una multa hasta por el equivalente a sesenta **veces la Unidad de Medida y Actualización**, que se hará efectiva a través de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado o por el Consejo de la Judicatura, en los términos del artículo 214 de esta ley, sin perjuicio de que, de estimarse pertinente, se dé vista con lo actuado al Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones. El importe de la multa ingresará al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier



286

disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA PRESIDIDA POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y



287

ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA EL CONTROL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

289

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 68 de la **Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 68.-Se aplicará multa por el equivalente de 50 a 500 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, en caso de incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que esta Ley y el reglamento correspondiente establecen. Esta sanción se impondrá a los propietarios gerentes, encargados, administradores, dependientes, empleados o comisionistas del establecimiento, o a quien o quienes resulten responsables, sin perjuicio de las que impongan otras Leyes o reglamentos.

A los propietarios gerentes, encargados, administradores, dependientes, empleados o comisionistas de establecimientos o negocios que expendan bebidas con contenido alcohólico sin contar con la licencia respectiva conforme al artículo 16 de esta Ley, independientemente del delito que se hubiere cometido en los términos de la legislación penal local, se les impondrá multa por el equivalente de 80 a 800 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, además el Ayuntamiento decomisará las bebidas con contenido alcohólico que en ellos se encuentren; asimismo, se harán acreedores a lo anterior, los propietarios, encargados y los que expendan las citadas bebidas en cualquier local o lugar, sin contar con el permiso correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN
AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.



291

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado

que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual. Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas



administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 69, 74, 75 y 76 de la **Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 69.- La multa consiste en el pago de una cantidad en dinero ante la Recaudación de Rentas del domicilio del infractor, la cual no podrá ser menor del importe de 20 **veces la Unidad de Medida y Actualización** ni mayor de 500. El cobro de las multas se hará conforme al procedimiento Administrativo de Ejecución.

Artículo 74.- Cuando una persona se ostente como pasante o profesionista sin serlo, y realice actos propios de una actividad profesional de las referidas en el artículo 6 de esta Ley, no tendrá derecho a percibir honorarios. La contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, se sancionará con una multa hasta por el equivalente a 500 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

Artículo 75.- Cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos que presentaron los profesionistas para su inscripción y registro ante la Dirección, se efectuará la cancelación del mismo y se revocará la autorización para el ejercicio profesional, independientemente de las sanciones penales a las

que se haga acreedor, se le impondrá por parte de la Dirección una multa hasta por el equivalente a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

...

Artículo 76.- Queda prohibido el uso de la expresión “Colegio” a las agrupaciones o asociaciones de profesionistas constituidas en el Estado, que no hayan sido reconocidas y debidamente registradas ante la Dirección en los términos de esta Ley. A quienes infrinjan esta disposición, la Dirección no les autorizará por ningún concepto en el término de 5 años el funcionamiento de agrupación profesional alguna y se les impondrá una multa hasta por el equivalente a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ



295

RÚBRICA
DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en

ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.



Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo,

para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 80 de la **Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad**, para quedar como sigue:

Artículo 80.- ...:

I. Corresponderá a las Direcciones Municipales de Vialidad y Protección Ciudadana de los Ayuntamientos según el caso de su competencia, la obligación de aplicar multa de 15 a 30 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a quienes ocupen indebidamente los cajones de estacionamiento preferencial, o bien obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad;

II. Corresponderá a los Ayuntamientos a través de la autoridad Municipal competente, la obligación de aplicar multa de 50 a 80 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados, así como las facilidades de acceso para personas con discapacidad. En caso de reincidencia de la misma falta, además de lo previsto se procederá a la clausura temporal del local por tres días;

III. Corresponderá a la Dirección General de Transporte en el Estado, la obligación de aplicar multa de 25 a 40 **veces la Unidad de Medida y Actualización**, a los responsables, concesionarios y prestadores en cualquier modalidad de los vehículos del servicio público de transporte que nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio a las personas con discapacidad; y

IV. A quien haga uso indebido de las placas de identificación y/o permisos temporales para los vehículos que usen o transporten a personas con discapacidad, se le aplicará multa de 15 a 30 **veces la Unidad de Medida y Actualización**.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.



ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS, ENFERMOS TERMINALES Y DE LA TERCERA EDAD, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ.

PRESIDENTE: EN RAZÓN DE QUE EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, AUGUSTO AVALOS LONGORIA, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, Y



300

ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR LAS CC. DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO, LA CUAL SE ENCUENTRA INSERTADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.**

Los suscritos Diputados, **AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, y ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como, las diputadas **ELIA ESTRADA MACIAS, MAR GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXVII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformar y adiciones diversas disposiciones de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango**, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se sabe que en nuestro país, más de las tres cuartas partes de la población tienen como su principal fuente de ingresos es el salario que perciben por el trabajo personal realizado; lo que da como resultado que el salario es el componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida. El artículo 123, de la Constitución Federal establece, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que el salario general diario en la república mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias de los trabajadores que lo perciben.

La política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años es la causante del estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.



301

Como un dato importante se señala que de diciembre de 1987 a principios del año 2016, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

Esto hace evidente que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, por esa razón hoy existe consenso con el sector empresarial, sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial.

La reforma en la que se ordena por el pacto federal la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, mediana o referencia para la determinación de obligaciones y el pago de sanciones o derechos fue aplazada hasta que el 27 de enero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que se hizo que se hizo a los artículos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo, 41, fracción II, inciso a), 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Transitorio Tercero, ordena que a la entrada en vigor del Decreto, en comento, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la Unidad de Medida y Actualización.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de la reforma a la ley que se presenta en esta iniciativa, en cada uno de los ordenamientos que contengan la referencia al salario mínimo para cambiarlo por el concepto de Unidad de Medida y Actualización, que deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, facultad que deberá ejercer anualmente con el fin de fijar el valor esta unidad, en base a la inflación anual.

Hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero del presente año, el salario mínimo no era un instrumento de política pública con un solo objetivo, toda vez que su valor no se utilizaba únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, ya que también era utilizado como una unidad, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diversas leyes del Estado con el objetivo de Indexar ciertos supuestos y montos, como el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, así como algunas cuotas y topes de las aportaciones al sistema de seguridad social entre otros.

En ese sentido, la vinculación al salario mínimo de ciertos supuestos y montos, generaba distorsiones no deseadas al provocar por ejemplo aumentos en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador promedio.

Así, por ejemplo un incremento al salario mínimo que no tenga relación con la productividad o capacidad de pago podría perjudicar a trabajadores cuyas percepciones no se ajustan necesariamente al cambio, pero si el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como son multas administrativas, créditos fiscales, indemnizaciones y las contribuciones a la seguridad social, entre otras, creando una especie de camisa de fuerza que inhibe el crecimiento del salario mínimo y por añadidura el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores.

México es el único país de América latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no había hecho nada para propiciar su recuperación, resultando un caso atípico entre los países con los cuales tenemos vinculación económica.

302

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de grandes problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos, pensiones y jubilaciones precarias entre otras.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad ni la economía, que de haber estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubiéramos visto una historia de ascenso sostenido en el nivel de vida de los asalariados

Para poder utilizar el salario mínimo como un instrumento de política pública con un solo propósito y solucionar las distorsiones descritas anteriormente, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en diversos ordenamientos en la legislación del Estado y los municipios;

Sin embargo, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos utilizados en las diversas leyes y ordenamientos legales vigentes en el Estado, que anteriormente se tazaban en salarios mínimos y que a partir de estas reformas y adiciones se harán en unidades de medida y actualización, conforme lo señala el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso "A" de la base 11 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto referido y conforme al artículo cuarto transitorio del mismo, este Congreso del Estado cuenta con el término de un año como máximo, para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por el de unidad de medida y actualización.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, nos permitimos someter para su trámite legislativo la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 58 de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango**, para quedar como sigue:

Artículo 58.....:

I.....

II. Multa de **cinco a diez veces la Unidad de Medida y Actualización**; en este caso, deberá tomar en cuenta la gravedad de la falta, la condición económica del infractor y lo que establecen los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III.....

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será el equivalente al monto que tenga el salario mínimo diario general vigente para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo Quinto Transitorio del citado Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO CUARTO. Los ejecutivos del estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

A t e n t a m e n t e:

Victoria de Durango, Dgo. a 09 de Enero de 2017.

RÚBRICA

DIP. AUGUSTO AVALOS LONGORIA

RÚBRICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO

RÚBRICA

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

RÚBRICA

DIP. ELIZABETH NAPOLES GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZALEZ

RÚBRICA

DIP. ELIA ESTRADA MACIAS

RÚBRICA

DIP. MAR GRECIA OLIVA GUERRERO

RÚBRICA

DIP. ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ

RÚBRICA

DIP. JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

RÚBRICA

DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN

PRESIDENTE: POR LO QUE PREGUNTO A LOS AUTORES SI DESEAN AMPLIAR LOS MOTIVOS DE SU PROPUESTA.

PRESIDENTE: LA INICIATIVA ANTES SEÑALADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PRESIDIDA POR LA DIPUTADA JAQUELINE DEL RIO LÓPEZ.



PRESIDENTE: ENTRAMOS AHORA A LA PRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO EN EL PUNTO NÚMERO 61 DE NUESTRA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUAMOS CON EL DESAHOGO DEL PUNTO DEL PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO GASOLINAZO PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO QUIÑONES SAMANIEGO REPRESENTANTE PARTIDO DEL TRABAJO PARA LO CUAL SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS.

DIPUTADO RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS BUENAS TARDES TODOS, DIPUTADO RIGOBERTO QUIÑONES SAMANIEGO INTEGRANTE DE LA 67ª LEGISLATURA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 FRACCIÓN TRES 212 Y 213 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO LA 67ª LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE MODIFIQUE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DONDE SE REDUZCAN LOS PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DEL DIESEL EN TODO EL PAÍS EN BASE A LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS PRIMERO ES UN HECHO NOTORIO Y PÚBLICO QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA ECONOMÍA MEXICANA NO CRECIÓ ABSOLUTAMENTE NADA COMO PROMETIERON LAS AUTORIDADES HACENDARIAS DEL PAÍS Y EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO TOMANDO EN CUENTA LAS



305

REFORMAS ESTRUCTURALES ASÍ COMO LA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y QUE COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y LAS PROMESAS DE ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE NUESTROS CIUDADANOS FUERON PURAS MENTIRAS EL PARTIDO DEL TRABAJO LO ADVIRTIÓ POR ELLO SE OPUSO SIEMPRE Y NO APROBÓ EL PACTO CONTRA MÉXICO Y LAS MAL LLAMADAS REFORMAS ESTRUCTURALES ASÍ COMO LA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO HOY CONTRARIO A LO QUE SE PROMETIÓ DE REDUCIR EL PRECIO DE LA LUZ GASOLINA DICEN Y GAS ESTO SIGUEN EN AUMENTO LO QUE ESTÁ PROVOCANDO DESESTABILIZACIÓN DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS Y ALZA GENERALIZADA DE LOS PRECIOS PRINCIPALMENTE DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMARIA DE PRIMERA NECESIDAD LO LAMENTABLE Y CÍNICO DE TODO ESTO ES QUE EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO NO ESTÁ COBRANDO EL PUEBLO DE MANERA NO ESTÁ COBRANDO EL PUEBLO DE MÉXICO EL FRACASO DE SU MODELO ECONÓMICO Y QUIERE QUE LA CIUDADANÍA PAGUE EL HUECO FISCAL QUE DEJÓ LA REFORMA ENERGÉTICA PRODUCTO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO HUECO QUE SE PUEDE LLENAR CON UNA NUEVA ESTRATEGIA FINANCIERA Y NO DE LOS BOLSILLOS DE LOS MEXICANOS SEGUNDO EL AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES SE GENERÓ A CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DESATANDO MOLESTIA Y RECHAZO TOTAL HACIA EL GOBIERNO FEDERAL EN EL CASO DE NUESTRA ENTIDAD LOS DURANGUENSES TENEMOS QUE PAGAR A \$17.12 POR LA GASOLINA MAGNA Y \$18.14 POR LA GASOLINA PREMIUM Y NO ES VERDAD QUE ESTE PRECIO OBEDEZCA LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO MÁS BIEN OBEDECE A UNA CARGA FISCAL



306

DEL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, DONDE LOS DONDE LAS GASOLINAS HAN DEJADO DE SER GASOLINERAS PARA CONVIÉRTASE SI SIMPLE Y SENCILLAMENTE EN CAJAS REGISTRADORAS DE HACIENDA, ES ASÍ QUE TENEMOS LA GASOLINA MÁS CARA DEL MUNDO DADO EL PODER ADQUISITIVO EN RELACIÓN AL SALARIO QUE TENEMOS LOS MEXICANOS PRIVATIZAN EL PETRÓLEO Y EL SECTOR ENERGÉTICO ENGAÑAN A LA POBLACIÓN PUBLICANDO MEJORAS Y BAJAS DE TARIFAS VENDEN EL PAÍS A LOS EXTRANJEROS Y AL FINAL TODAVÍA QUIEREN QUE SEA EL PUEBLO EL QUE CONTINUÁN PAGANDO PARA REMEDIAR SUS ERRORES Y AHORA PARA JUSTIFICAR ESTOS INCREMENTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA QUE LOS AUMENTOS QUE SE REALIZAN SON PARA AJUSTAR LAS GASOLINAS A LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ESTA Y AMENAZA CÍNICAMENTE QUE SI BAJA EL PRECIO DE LA GASOLINA SE VAN A BAJAR TAMBIÉN LOS APOYOS A LA EDUCACIÓN, AL DESARROLLO SOCIAL Y A LOS PROGRAMAS SOCIALES, A DIARIO ESCUCHAMOS QUEJAS DE PADRES DE FAMILIA, DE ESTUDIANTES DE TRABAJADORES, DE EMPRESARIOS SOBRE LOS DENOMINADOS GASOLINAZOS, QUEJAS EN LAS QUE MANIFIESTAN CON TODA RAZÓN QUE LA GASOLINA SE HA CONVERTIDO EN UN ARTÍCULO DE LUJO, PARA LO CUAL SU SERVIDOR RESPETO Y APOYO TODAS LAS MANIFESTACIONES HECHAS POR LOS DIFERENTES HECHAS POR LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD LLÁMESE REDES SOCIALES, EN PLANTONES, EN MARCHAS ETCÉTERA, ETCÉTERA, ETCÉTERA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PACÍFICAS PERO REPRUEBO LA PARTICIPACIÓN DE GENTE ENCAPUCHADA SAQUEANDO VANDÁLICA MENTE COMERCIOS QUE TIENEN COMO PROPÓSITO VIOLENTAR LAS MANIFESTACIONES EN



307

CONTRA DEL AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES CON EL FIN DE JUSTIFICAR LA REPRESIÓN DESDE EL GOBIERNO Y DESPRESTIGIAR LA DEMANDA SOCIAL ESTO MEJOR CONOCIDOS SON LAS CORTINAS DE HUMO, AQUÍ QUIERO HACER UN PARÉNTESIS PARA FELICITAR A LOS DURANGUENSES QUE LUCHARON Y SIGUEN LUCHANDO INCANSABLEMENTE EN DIVERSAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DE MANIFESTACIONES PERDÓN EN LA TOMA DE PEMEX UNA VEZ MÁS DEMOSTRAMOS QUE LOS DURANGUENSES SOMOS GENTE SOLIDARIA Y UNIDA QUE CUANDO ALGO NOS AFECTA SOMOS GUERREROS QUE PELEAMOS HASTA CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS CLARO EJEMPLO ESTÁ EL FRUTO DE LA BATALLA QUE LOGRÓ LA CANCELACIÓN DEL PAGO DEL REPLAQUEO COMO EN SU MOMENTO TAMBIÉN LO MANIFESTÉ COMPAÑERO BENÍTEZ EN SU MOMENTO TAMBIÉN FUI SOLIDARIO EN ESE TEMA Y MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO A ESTE REPLAQUEO Y SOBRE TODO A ESTAS MEDIDAS BRUTALES DE CAPTURAR MÁS INGRESOS YA SEA PARA EL ESTADO O PARA EL MUNICIPIO FUI EL ÚNICO DIPUTADO QUE ME MANIFESTÉ Y LO VOTE EN COMISIÓN Y EN EL PLENO EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, PORQUE CREÍAMOS QUE MÁS ALLÁ DE AYUDAR VENÍA A PERJUDICAR MÁS LOS BOLSILLOS DE TODOS LOS DURANGUENSES HOY EL PRESIDENTE MUNICIPAL ENRÍQUEZ ME DIO LA RAZÓN Y PRUEBA DE ELLO FUE QUE ANUNCIÓ EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NO VA A COBRAR NI UN SOLO IMPUESTO MÁS EN LO QUE RESPECTA DE SU GOBIERNO EN ESTE AÑO, ES ASÍ QUE LA MISMA CIUDADANÍA NOS DA UN EJEMPLO A TODOS LOS POLÍTICOS Y A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PORQUE FUERON ELLOS QUIENES ENCARARON AL GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

308

CUANDO FUE A PEMEX Y FUERON LOS CIUDADANOS QUIENES CON PRUEBAS ARGUMENTARON QUE SE HABÍA COMPROMETIDO JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES A NO REPLAQUEAR Y QUE HOY NO LO QUERÍA CUMPLIR ES ASÍ QUE LOS CIUDADANOS NOS DAN UNA MUESTRA MÁS Y NO LE QUEDÓ DE OTRA EL GOBERNADOR ROSAS AISPURO QUE TUVO QUE SALIR HUYENDO Y CUMPLIR LO QUE ÉL PROMETIÓ EN CAMPAÑA MI FELICITACIÓN A TODA LA CIUDADANÍA PORQUE NOS ESTÁN DANDO UN CLARO EJEMPLO DE QUE HOY MÁS QUE NUNCA TENEMOS QUE CUMPLIR PORQUE SOMOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO Y ASÍ TENEMOS QUE ACTUAR PARA TODOS Y CADA UNO DE ELLOS CUENTAN CON TODO MI APOYO Y RESPALDO PERO TAMBIÉN HABRÁ QUE HACER MENCIÓN DE AQUELLOS SENADORES POR DURANGO QUE TRAICIONARON LA VOLUNTAD Y AL PUEBLO DURANGUENSES ME REFIERO ESPECÍFICAMENTE AL SENADOR DE LA REPÚBLICA ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, QUE EL EN COMPLACENCIA CON ENRIQUE PEÑA NIETO VOTARON A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA, TAMBIÉN HABRÁ QUE RECORDAR PORQUE LOS DURANGUENSES TENEMOS MEMORIA QUE FUE LA ACTUAL ALCALDESA DE GÓMEZ PALACIO LETY HERRERA QUE SIENDO SENADORA TAMBIÉN APROBÓ ESTA REFORMA ENERGÉTICA Y POR SUPUESTO TAMBIÉN HABRÁ QUE RECORDARLES A TODOS LOS DURANGUENSES QUE EL GOBERNADOR NUESTRO GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SIENDO SENADOR Y EN COMPLACENCIA TAMBIÉN CON ENRIQUE PEÑA NIETO FUERON QUE VOTARON A FORO DE LA REFORMA ENERGÉTICA DÁNDOLE LA ESPALDA AL PUEBLO DE MÉXICO Y SOBRE TODO DÁNDOLE LA ESPALDA A TODOS LOS DURANGUENSES QUE CONFIARON EN ELLOS Y LES BRINDARON SU

VOTO, NO SE VALE ESTO SON PUÑALADAS TRAPERAS POR PARTE DE LOS SENADORES QUE EN SU MOMENTO APROBARON ESTA REFORMA ENERGÉTICA ENTREGÁNDOLE LOS PETRÓLEOS ENTREGÁNDOLE EN SU MOMENTO TAMBIÉN LLÁMESE PLAYAS, HIDROCARBUROS, TIERRAS, AGUAS, RÍOS, MINAS, PLATA, ORO A LOS EXTRANJEROS TENEMOS UN PRESIDENTE QUE CUANDO LE DA LA GANA LE BAJA LOS PANTALONES A LOS MEXICANOS Y LOS PROSTITUYE CON EL GOBIERNO AMERICANO NO SE VALE Y NO VAMOS A TOLERAR NINGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS SI TANTAS GANAS TIENE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENTREGARLE TODO A ESTADOS UNIDOS QUE LE ENTREGUE LA GAVIOTA PORQUE LA GAVIOTA SI LE PERTENECE, EL PETRÓLEO ES DE LA NACIÓN Y ES DE TODOS LOS MEXICANOS, TERCERO ANTE ESTA SEVERA PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL EL PARTIDO DEL TRABAJO PLANTEA ECHAR ABAJO LA REFORMA ENERGÉTICA Y QUE INMEDIATAMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO DEROGUE EL IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS MEJOR CONOCIDO COMO JETS A LA GASOLINA QUE EQUIVALE AL 27.3 POR CIENTO DEL IMPUESTO CON LO QUE SE LOGRARÍA REDUCIR EL PRECIO DE LA GASOLINA EN CINCO \$5.50 MEDIDA QUE EVITARÍA AFECTAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MEXICANAS Y LA ECONOMÍA DEL PAÍS POR OTRO LADO EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA DEL PARTIDO DEL TRABAJO ESTÁ POR PRESENTAR UNA INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE PROPONE QUE EL PRECIO DE LA GASOLINA SE FIJE EN \$10 Y QUE ESTE VALOR SEA EL QUE DETERMINE LA LIBERACIÓN DEL PRECIO RESPECTO A LA COMPETENCIA PREVISTA PARA ESTE AÑO AMBAS PROPUESTAS LAS APOYAMOS CABALMENTE PORQUE SON VÍAS RÁPIDAS DE SOLUCIÓN A

ESTE PROBLEMA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE VIVE NUESTRO PAÍS ES DEPLORABLE DESDE QUE INICIÓ LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN FEDERAL HEMOS IDO DECRECIENDO GRACIAS A LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA FISCAL LESIVA Y RECAUDATORIA EN TODOS LOS ASPECTOS PARA LA POBLACIÓN Y PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS AUNADO A LO ANTERIOR LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS COMO ES EL CASO DE LOS COMBUSTIBLES SE HAN INCREMENTADO DE MANERA EXCESIVA LO QUE HA OCASIONADO REPUDIO Y CORAJE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, BAJO ESTE CONTEXTO EN EL PARTIDO DEL TRABAJO ESTAMOS CIERTOS DE QUE DEBEMOS GARANTIZAR Y VELAR POR EL BIENESTAR DE TODOS LOS MEXICANOS POR LO QUE SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO, LA LXVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DURANGO CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO DECRETA, ARTÍCULO ÚNICO LA LXVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DURANGO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE MODIFIQUE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DONDE SE REDUZCAN LOS PRECIOS MÁXIMOS EN VENTA AL PÚBLICO DE LAS GASOLINAS Y DEL DIESEL EN TODO EL PAÍS, DADO EN EL SALÓN DE SESIONES HONORABLE DEL CONGRESO DEL ESTADO DURANGO EN VICTORIA DE DURANGO, DURANGO A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2017 Y POR ÚLTIMO QUISIERA CONCLUIR MI INTERVENCIÓN CITANDO UNA FRASE MUY CONOCIDA POR TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS DEL LICENCIADO BENITO JUÁREZ QUE DICE MALDITOS AQUELLOS QUE CON



311

SUS PALABRAS DEFIENDEN AL PUEBLO Y CON SUS HECHOS LO TRAICIONAN ES CUANTO PRESIDENTE.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADO EL PUNTO DE ACUERDO SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PRESIDIDA POR LA DIPUTADA SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO.

PRESIDENTE: EN NUESTRO SIGUIENTE PUNTO DEL DÍA EN EL PUNTO NÚMERO 62 CONTINUAMOS CON DESAHOGO DEL PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO NO AL INCREMENTO DEL PRECIO DE LAS GASOLINAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS ELIA ESTRADA MACÍAS Y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ Y MAR GRECIA OLIVA GUERRERO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR LO CUAL SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ELIA ESTRADA MACÍAS HASTA POR QUINCE MINUTOS.

DIPUTADA ELIA ESTRADA MACÍAS: CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y A LOS DEMÁS INTEGRANTES COMPAÑERAS DIPUTADAS DIPUTADOS EL CONSTITUYENTE REVOLUCIONARIO DE QUERÉTARO NOS LEGÓ UN CONJUNTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES Y DE EJERCICIO DE SOBERANÍA CONSIDERADOS DE AVANZADA EN AQUELLOS TIEMPOS EL ARTÍCULO TERCERO EN MATERIA DE EDUCACIÓN EL ARTÍCULO 27 EN MATERIA DEL DOMINIO DEL SUELO SUBSUELO Y DEL TERRITORIO NACIONAL Y EL ARTÍCULO 123 EN MATERIA DEL TRABAJO FUERON EL

EJE DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE RETOMABA DISPOSICIONES YA CONTEMPLADAS POR EL CONSTITUYENTE DE 1857 E INCORPORABA LOS RECLAMOS DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE MILES DE MEXICANOS Y MEXICANAS QUE OFRENDARON SU VIDA AL GRITO DE TIERRA Y LIBERTAD Y SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN SIN EMBARGO A PESAR DE ESTAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE LE ASEGURABAN AL ESTADO MEXICANO EL DOMINIO SOBRE SU TERRITORIO LAS EMPRESAS PETROLERAS EXTRANJERAS ACTUABAN EN NUESTRO TERRITORIO CONSERVANDO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN EN DONDE LA LEY QUE IMPERABA ERA LA LEY QUE ELLOS DICTABAN IMPONÍAN SAQUEO DEL PRODUCTO DEL SUBSUELO NULO PAGO DE IMPUESTOS EXPLOTACIÓN Y DISCRIMINACIÓN BRUTAL DE LA MANO DE OBRA MEXICANA DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE Y ABUSO DE TODO TIPO, ESTE ERA EL PANORAMA QUE CAMPEABA EN MÉXICO ANTES DE 1938 A UNOS CUANTOS AÑOS DE HABER TERMINADO LA PRIMERA REVOLUCIÓN SOCIAL DEL SIGLO XX LA REVOLUCIÓN MEXICANA ANTE ESTE PANORAMA POCO ALENTADOR EL 18 DE MARZO DE 1938 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DABA UN MENSAJE A LA NACIÓN INFORMANDO DE LA DECISIÓN DE SU GOBIERNO DE EXPROPIAR LA INDUSTRIA PETROLERA EN MANOS EXTRANJERAS PARA QUE ÉSTA PASARÁ A DOMINIO DEL PUEBLO MEXICANO UNA DECISIÓN HISTÓRICA CONTRA VIENTO Y MAREA Y SOBRE TODO EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL GRAN CAPITAL INGLÉS Y DEL CAPITAL NORTEAMERICANO PERO QUE A PESAR DE LOS ENORMES RIESGOS SIGNIFICABA UN GRAN PASO FAVOR DE LOS INTERESES DEL PUEBLO DE MÉXICO LA RESPUESTA NO SE HIZO ESPERAR EL PUEBLO HUMILDE SE DESBORDÓ EN APOYO A



313

ESTA MEDIDA IMPULSADA POR UN GRAN ESTADISTA REVOLUCIONARIO EL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO A 79 AÑOS DE ESTA MEDIDA HISTÓRICA EL GRAN CAPITAL EXTRANJERO HA LOGRADO RECUPERAR EL CONTROL Y EL DOMINIO SOBRE NUESTRO PETRÓLEO CON COMPLACENCIA Y COMPLICIDAD DE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES QUE HAN SENTADO SUS REALES EN NUESTRO PAÍS DESDE 1982 LAS GRANDES NACIONALIZACIONES HECHAS POR LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS SE HAN VENIDO TIRANDO AL BASURERO CAPITALISTA MEDIANTE JUSTIFICACIONES FRÍVOLAS Y BANALES HAN LLAMADO POPULISTAS TRASNOCHADOS A QUIENES DEFENDEMOS LAS CONQUISTAS EMANADAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA MIENTRAS SE SAQUEA CON IMPUNIDAD LOS RECURSOS QUE DEBIERAN UTILIZARSE PARA IMPULSAR EL DESARROLLO NACIONAL, LA CORRUPCIÓN DE GOBERNANTES SE HA MEZCLADO CON LA VORACIDAD DEL CAPITAL INTERNACIONAL PARA APROPIARSE DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, POR SI ESTO FUERA POCO A TRES AÑOS DE CONSUMAR UNA CONTRARREFORMA ENERGÉTICA EL GOBIERNO FEDERAL ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO DECIDE INCREMENTAR LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS EL GAS Y EL DIESEL MEDIANTE EL DISFRAZ YA DESGASTADO DE LA LIBERALIZACIÓN Y RETIRO DE SUBSIDIOS EL RESULTADO EN UN PAÍS PETROLERO SE LE VENDE EL PUEBLO LA GASOLINA MASCARA QUE LA GASOLINA QUE SE VENDE EN PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO PARADOJAS DE LIBRE COMERCIO ESTE BRUTAL INCREMENTO HA LEVANTADO LA INDIGNACIÓN Y EL ENOJO DE TODOS LOS MEXICANOS QUE CON RAZÓN SE HAN MOVILIZADO EN PROTESTA A ESTA MEDIDA QUE ES UNA BURLA POR EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA ENRIQUE PEÑA NIETO HABÍA



314

VENDIDO SU REFORMA ENERGÉTICA MEDIANTE EL COMPROMISO DE QUE YA NO SE IBA A VER MÁS INCREMENTO AL PRECIO DE LAS GASOLINAS, VIL MENTIRA AHORA RESULTA QUE ESTE INCREMENTO ES NECESARIO PARA NO DETENER EL DESARROLLO DE MÉXICO ES NECESARIO RECAPACITAR Y RECONOCER LOS ERRORES Y POR LO TANTO ES URGENTE RECTIFICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE HAN DADO PIE AL INCREMENTO DE LOS ENERGÉTICOS Y A LA ESCALADA EN GENERAL DE LOS PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO ES URGENTE RECTIFICAR MEDIANTE UNA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 QUE DISPONEN Y PERMITEN LA LIBERALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS, EL DIESEL Y EL GAS DE TAL MANERA QUE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR SE MANTENGAN EN LOS RANGOS QUE SE ENCONTRABA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, COMPAÑEROS DIPUTADOS COMPAÑERAS, DIPUTADAS EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD SE SUMA A LA INDIGNACIÓN Y A LA PROTESTA DEL PUEBLO DE DURANGO Y DECIMOS CON CLARIDAD UN SEGUNDO NO AL GASOLINAZO Y DESDE ESTA TRIBUNA POPULAR EXIGIMOS SE LIBERE A LOS DETENIDOS EN EL DESALOJO DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX Y ADEMÁS PEDIMOS QUE NO SE CRIMINALICE ESTA JUSTA PROTESTA POPULAR, RECONOCEMOS LA SENSIBILIDAD Y BUEN TINO DEL GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES AL DECIDIR SUSPENDER EL COBRO DE TENDENCIAS Y REPLAQUEO Y LE PEDIMOS HÁGALO PROPIO Y SE SUME A LA DEMANDA DEL PUEBLO DURANGUENSE PARA ECHAR ATRÁS EL INCREMENTO A LAS GASOLINAS, EL DIESEL Y EL GAS EN CUANTO A NOSOTROS INTEGRANTES DE ESTA 67ª LEGISLATURA CONSIDERÓ



315

DEBEMOS SUMARNOS A LA PROPUESTA POPULAR HACIENDO USO DE LAS HERRAMIENTAS PARLAMENTARIAS EN EL DEBIDO EJERCICIO DE NUESTRO ENCARGO POPULAR POR LO ANTERIOR VENIMOS A PRESENTARSE SIN MÁS PREÁMBULOS EL SEGUIR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO LOS INTEGRANTES DE LA 67 LEGISLATURA DEL CONGRESO DE DURANGO NOS SOLIDARIZAMOS CON LA INCONFORMIDAD Y LAS ACCIONES DE PROTESTA PACÍFICA QUE EL PUEBLO DURANGO ESTÁ REALIZANDO EN CONTRA DEL DENOMINADO POPULARMENTE GASOLINAZO EN TAL SENTIDO SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DAR MARCHA ATRÁS AL INCREMENTO DEL PRECIO DE LAS GASOLINAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO Y/O LEGISLATIVO QUE CONSIDERE CONVENIENTE EN VER EN VIRTUD DEL BRUTAL IMPACTO QUE ESTÁ CAUSANDO EN LA ECONOMÍA DEL PUEBLO MEXICANO POR SU ATENCIÓN GRACIAS.

PRESIDENTE: MUCHAS GRACIAS DIPUTADA EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIA ESTRADA SE TURNA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

PRESIDENTE: EN EL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA HABÍA INSCRITO UN PUNTO DE ACUERDO EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OCHOA EL CUAL ME INFORMAN SE RETIRA DE LA ORDEN DEL DÍA.

PRESIDENTE: ENTRANDO AHORA EL TEMA DE ASUNTOS GENERALES PARA LO CUAL HAGO DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO QUE ANTE ESTA



316

PRESIDENCIA SE REGISTRÓ EL SIGUIENTE ASUNTO CON EL TEMA DENOMINADO SITUACIÓN DEL PAÍS Y DEL ESTADO PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, POR LO CUAL SE LE CONCEDE LA PALABRA HASTA POR QUINCE MINUTOS.

PRESIDENTE: AH LO HA RETIRADO MUY BIEN SE RETIRA EL PUNTO, EL PRONUNCIAMIENTO DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA.

PRESIDENTE: SIENDO LAS (13:50) TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY; HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CLAUSURA LA SESIÓN Y SE CITA AL PLENO A LA SESIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES (17) DE ENERO A LAS (11:00) ONCE HORAS, DAMOS FE.-----

DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE

DIP. MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ
SECRETARIA

317

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
SECRETARIA